Información Importante

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del Catálogo en línea del CRAI-Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la CRAI-Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos los usos que tengan **finalidad académica**, nunca para usos comerciales, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos morales sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.”

**Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-Biblioteca
Universidad Santo Tomás, Bucaramanga**

**EL VOTO OBLIGATORIO, UN MECANISMO PARA LA LEGITIMACIÓN
DE LA CIUDADANÍA POLÍTICA EN COLOMBIA**

RUBEN DARÍO CAICEDO GELVES

Director de tesis:

JOHANA SARIT RIAÑO ACOSTA

MAESTRIA EN DERECHO III CORTE

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

BUCARAMANGA-COLOMBIA

2018

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
Capítulo I: El derecho al voto y sus implicaciones	11
1. Evolución histórica del voto y los mecanismos de participación ciudadana	11
2. Del concepto de ciudadanía y la relación del individuo con el Estado (Ciudadanía social – Ciudadanía política)	16
2.1. Diferencias entre ciudadanía política y ciudadanía social	25
3. Participación política convencional y no convencional	27
3.1. Participación política convencional	28
3.2. Participación política no convencional	30
4. Sistema y comportamiento electoral	34
4.1. Organización electoral	35
4.2. El derecho al voto.....	36
4.3. Características del voto	38
Capítulo II: El deber al voto. Análisis de referentes	40
1. Estudio de ordenamientos jurídicos electorales de América del Sur. Análisis de referentes	40
1.1. El voto en Venezuela	44
1.2. El voto obligatorio en Perú	45
1.3. El voto obligatorio en Ecuador	46

1.4. El voto obligatorio en Uruguay.....	49
1.5. El voto obligatorio en Argentina.....	52
1.6 El voto obligatorio en Brasil	55
1.7. El voto obligatorio en Bolivia	56
1.8. Chile, de la transición del voto obligatorio al voto voluntario	58
Capítulo III: El voto obligatorio, un mecanismo para la legitimación de la ciudadanía política en Colombia	63
1. Del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho y su incidencia en la participación ciudadana	63
2. El voto y la legitimación de la ciudadanía política	67
3. El fenómeno del abstencionismo	64
3.1. Ejemplo y análisis de dos casos	69
4. Antecedentes de reformas constitucionales para el establecimiento del voto obligatorio en Colombia.....	71
4.1. Acto legislativo No. 03 de 2006	73
4.2. Acto legislativo No. 25 de 2007.....	75
4.3. Acto legislativo No. 14 de 2010.....	76
4.4. Acto legislativo No. 01 de 2014.....	78
5. Viabilidad y procedencia de la implementación del voto obligatorio en Colombia	79
5.1. Del voto obligatorio, el derecho fundamental a la libertad y el libre desarrollo de la personalidad	80

CONCLUSIONES	83
---------------------------	-----------

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	91
---	-----------

LISTA DE FIGURAS

1. Figura No. 1. Situación electoral de siete países de América Latina.	40
2. Figura No. 2. Resultados electorales Elecciones Presidenciales 2014.	66
3. Figura No. 3. Historial de abstención en Elecciones Presidenciales.	72

INTRODUCCIÓN

La consolidación de un verdadero Estado democrático se encuentra ligada a la participación de la ciudadanía, su incidencia en los asuntos públicos y del Estado, y en ultimas, en la legitimidad que alcance la misma institucionalidad, a partir del pueblo, quien es fuente de la soberanía. En este sentido, cuando se está en un Estado democrático, donde las decisiones trascendentales se toman a través de elecciones o consultas populares, bien sea desde la conformación del gobierno, a través de la elecciones de dirigentes unipersonales y cuerpos colegiados, o cuando se pone en consideración del pueblo determinada decisión a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, es de vital importancia para la legitimidad de las mismas, el máximo nivel de participación de los ciudadanos, debido a que a mayor número de electores expresando su voluntad a través del voto, más sólido se hace el consenso decisorio, y por tanto, la aceptación de los gobiernos, de sus decisiones e instituciones, será mayor, la institucionalidad mucho más estructurada y respetada.

En materia de participación electoral, el panorama en Colombia es desolador, y acompañado de toda la historia electoral del país, es esta, una nación de abstencionismo, donde no se ha tomado conciencia de la relevancia e importancia para el Estado de un ejercicio activo de la ciudadanía, de ser el pueblo un verdadero cuerpo político que se involucra en los asuntos del Estado y que busca de manera conjunta maximizar el beneficio de sus instituciones, que busca una armonía entre el Estado y la sociedad, en el que cada ciudadano se sienta representado por su Estado, su gobierno y sus instituciones, y aumente así la legitimidad de los mismos.

Frente al escenario de abstencionismo, son múltiples las acciones que desde el Estado se han generado, en la búsqueda de consolidar una ciudadanía más activo y participativa, sin embargo, ni las campañas de educación electoral, la publicidad, las estrategias de información y concientización han generado el impacto esperado, por lo que se ha hecho necesario pensar acciones más contundentes que garanticen la maximización de la participación de los ciudadanos, como lo es el voto obligatorio, siendo este, el objeto de estudio y análisis de la presente investigación, como un mecanismo hacia la configuración de una democracia sólida y una ciudadanía política activa.

La presente investigación busca demostrar la necesidad de implementar el voto obligatorio en Colombia, como un camino para afianzar una ciudadanía activa y participativa, hacia la consolidación misma del Estado en su legitimidad y la solidificación de sus instituciones, a través de una metodología cualitativa, de análisis crítico y propositiva, para ello, en el primer capítulo se parte del análisis histórico y evolutivo del voto como mecanismo de participación ciudadana, se observan las diferencias entre ciudadanía política y ciudadanía social, se realiza un estudio de lo que es la participación política en todas sus aristas e implicaciones, para terminar conociendo el sistema y el comportamiento electoral colombiano, esto, como un diagnóstico o caracterización de la problemática de la participación electoral y el abstencionismo.

En el segundo capítulo de esta investigación, realiza una observación de las realidades electorales de otros países de América del Sur, en el que se puede encontrar como Ecuador y Venezuela cuentan con un voto libre y voluntario, al igual que Chile, donde se hizo un tránsito del voto obligatorio al voto voluntario, pero también, donde se evidencia que la mayoría de países, entre estos Perú, Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia, cuentan con sistemas de voto

obligatorio, y se encuentra como una constante en todos ellos, que asumieron dicho modelo como una forma de fortalecer la democracia, lo cual brinda elementos importantes para fortalecer la tesis de esta investigación, enfocada al fortalecimiento de la ciudadanía política, la participación activa y el fortalecimiento de la democracia, a partir del voto obligatorio en Colombia.

El tercer capítulo presenta la importancia de la participación ciudadana activa dentro del marco del Estado social y democrático de derecho, la necesidad de configurar una ciudadanía activa que legitime la democracia y la institucionalidad propia del Estado, como a través de la maximización de la participación ciudadana a nivel electoral, se convierte en una garantía para el Estado en su legitimación, en la aceptación de sus propios ciudadanos de sus decisiones y todas sus acciones propias del ejercicio de gobierno. Así mismo, se evidencia en este capítulo que en los últimos años se han presentado varios intentos de reforma constitucional orientados a la implementación del voto obligatorio, sin embargo, estos no han prosperado en el legislativo, no cerrando el debate de la importancia y la necesidad de dicha reforma, sino por el contrario, convirtiéndose en un escenario para la disertación académica y los aportes a la consolidación de un modelo efectivo de ejercicio de la ciudadanía. Es importante resaltar que en este capítulo se efectúa el análisis de viabilidad de la propuesta de voto obligatorio, se expone a partir del análisis de referentes ya efectuado, de los diferentes sustentos teóricos y normativo, cómo es viable y ajustado el ordenamiento constitucional al y modelo de Estado colombiano, la implementación de este modelo propuesto, y como contrario a algunos planteamientos que manifiestan que se convertiría en una afrenta a las libertades ciudadanas y los derechos fundamentales, la realidad del voto obligatorio es que fomenta la participación, el ejercicio de esos mismos derechos, la

responsabilidad social para con el Estado mismo y la sociedad, y sobre todo, es una solución a la necesidad creciente de legitimación en la institucionalidad y el Estado.

De esta manera, la presente investigación brinda elementos de sustento al voto obligatorio, y se une al debate académico en materia de participación política y democracia, desde un ejercicio analítico de las disposiciones constitucionales, el modelo de Estado, el sistema democrático con que cuenta Colombia y la realidad social y electoral del país, así, este es un estudio relevante enfocado a fortalecer la postura del voto obligatorio en Colombia. En este trabajo, académicos, gobernantes, ciudadanos y cualquier lector interesado, encontrará los argumentos necesarios para entender en el marco de un Estado social y democrático de derecho, la implementación obligatoria del voto al ejercicio de la ciudadanía, todo esto encaminado a fortalecer al Estado y su institucionalidad, a sus gobiernos y sus decisiones, haciendo de nuestro sistema electoral un modelo de participación, sólida y responsable por parte de la ciudadanía colombiana.

Capítulo I:

EL DERECHO AL VOTO Y SUS IMPLICACIONES

1. Evolución histórica del voto y los mecanismos de participación ciudadana.

Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 diversas transformaciones se introdujeron en el campo político, jurídico y estructural del Estado, avances que van desde la consagración de una amplia carta de derechos, los mecanismos para la garantía de estos, la adopción de derechos económicos, sociales y culturales, y una significativa evolución en materia de participación política y ciudadana.

A manera de recuento histórico y de contexto, se debe observar que desde el año 1853, a partir de las ideas de gobierno liberal implementadas en la época, más allá del reconocimiento de libertades fundamentales y eliminación de la esclavitud, se introdujo, la elección popular de los Gobernadores de Provincia y los miembros de las Asambleas Departamentales, eliminando la figura del delegado.

Desde el derecho público, y la teoría política, la delegación se entiende como “la acción y efecto de delegar poderes o atribuciones por una autoridad a otra de menor rango, con arreglo a instrucciones específicas” (Borja, s.f.), así, durante el tiempo en que operó en Colombia dicha figura, el ejecutivo delegaba en una persona de su confianza, la administración de determinado departamento, nombrándolo gobernador, es decir,

Asigna a las autoridades periféricas o corporaciones autónomas el ejercicio de determinadas funciones a fin de evitar la excesiva e inconveniente acumulación de ellas en los órganos centrales. Se trata de una transferencia de una parte de la autoridad y responsabilidad del gobierno central. (Borja, s.f.).

El cambio introducido con la Constitución de 1853 lleva a una nueva forma de gobierno, la democracia representativa o representación política, donde es el pueblo, mediante mecanismos de elección popular, quien decide sobre sus mandatarios y gobernantes. En este sentido, el pueblo, o la masa de electores, representa una unidad de poder, que a partir de la individualidad de cada miembro, puede tomar una decisión colectiva, o por lo menos mayoritaria, y escoger así un gobernante que represente sus intereses, es decir, una multiplicidad de electores conforman una unidad de decisión, que no puede representarse a sí misma, por su propia complejidad, lo que la lleva, a en uso de sus facultades y poderes soberanos, elegir representantes para que sean voceros de sus intereses dentro del aparato estatal, y así, de forma democrática, ser gobernados a partir de su propia elección. En términos de lo expuesto por Gadamer (1983):

Una idea estática de representación, según la cual el poder representa a la sociedad en su unidad política. Puesto que la sociedad como unidad política o de decisión no existe por sí misma, ya que en términos reales no es sino una multitud atomizada de voluntades e intereses, su consideración unitaria es una abstracción que sólo tiene existencia real a través de un poder que hable en nombre de la totalidad social: se trata por tanto de una representación *creativa* en el sentido de que da origen a la unidad política social (pueblo, nación) que sólo se hace presente como representación. (Criado, 2012).

Con lo anterior, se dio un importante avance en el inicio de la consolidación de una verdadera democracia, toda vez que se permitió la participación directa del pueblo, como poder soberano en la elección de los gobernantes, dejando a un lado, el centralismo, donde el ejecutivo mismo delegaba sus funciones en determinada persona, a su gusto y criterio, para abrir paso a la carrera política por la consecución de los votos dentro del potencial electoral,

la participación ciudadana en materia electoral y de toma de decisiones, y en general, se da paso al verdadero ejercicio de la ciudadanía política por parte de los ciudadanos. Así, se puede confirmar lo planteado por Marcos Criado:

La representación política, referida al conjunto del sistema político-institucional y no sólo a las instituciones parlamentarias, cumple una función de legitimación general o consensual del Estado y de sus relaciones estructurales con el modo de producción, pero incumple cada vez más la función de legitimación concreta, mediante la representación de los intereses reales fragmentados de una sociedad atomizada en las demandas propias del reconocimiento y de los valores postmaterialistas. Dicho de otro modo, la representación sería eficaz a la hora de expresar intereses generales, sobre los que crearía una impresión de consenso, pero ineficaz en la labor de mediación e integración en el Estado de los intereses empíricos. Ello provocaría una progresiva descomposición del nexo entre sociedad y Estado, cuya manifestación social más evidente es la apatía ciudadana y la desconfianza en la política, pero, al mismo tiempo, se da un intento de recomposición a través de formas participativas y de iniciativa popular. (Criado, 2012).

En el año 1905, tras un proceso de reformas, se incluye el derecho de representación de las minorías en los diferentes cargos directivos de las corporaciones o entidades públicas, lo cual representa un avance en materia de participación ciudadana hacia una administración incluyente.

Con las reformas de 1910, se incluyó la elección presidencial a través de voto directo del pueblo, lo cual significa un cambio en materia electoral y política, sin embargo, otro

cambio fundamental en materia de participación ciudadana se registra en el año 1936, con la reforma que consagra y reconoce el derecho de asociación sindical y de huelga.

Pese que a la fecha los Representantes a la Cámara ya eran elegidos por voto popular, fue hasta el año 1945, tras un proceso de reforma, donde se consagró la elección de la misma manera de los Senadores, quienes hasta el momento eran elegidos por Asambleas.

En el año 1957, mediante plebiscito, se consagró el Frente Nacional y la “paridad política” 50 - 50 en las 3 ramas del poder público, estableciendo límites y condiciones a la participación a los dos partidos, siendo a su vez importante por la ratificación del derecho al voto de la mujer, el cual había sido reconocido durante el gobierno de Rojas Pinilla. Así mismo, se encuentra que, en el año de 1979, durante el periodo presidencial de Julio César Turbay Ayala, este pretendió imponer el voto obligatorio modificando la constitución a través del Acto Legislativo número 1 del mismo año, donde se daba vía libre a la regulación legislativa del voto, tanto en el fomento, como en la posibilidad de establecerlo obligatorio¹. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia anuló dicha posibilidad al declarar inexecutable dicha modificación constitucional mediante sentencia 786 de 1979, en la cual resolvió:

Declárense inexecutables, por ser violatorios de la Constitución Nacional, los siguientes textos del Acto legislativo número 1 de 1979: 1° La parte final del segundo inciso del artículo 2°, cuyo texto es el siguiente: "La ley podrá igualmente estimular el ejercicio de la función del sufragio y aún establecer el voto obligatorio. (Sentencia 786, 1979).

Fue en la reforma constitucional de Belisario Betancur, en la cual se estableció la elección popular de alcaldes, siendo a su vez un avance en la democratización de la

¹ Véase Acto Legislativo No. 1 del 4 de diciembre de 1979, artículo 2.

administración pública, de la participación ciudadana y las transformaciones electorales. Mediante el acto legislativo 1 de 1986, se permitió la elección popular de alcaldes, el artículo primero de la mencionada norma consagraba que “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial” (Acto Legislativo 1, 1986). Pese a la modificación anterior, el cargo de Gobernador seguía siendo designado, bajo la figura de la delegación por parte del presidente de la República, y fue hasta el año 1991, con la entrada en vigencia de la promulgación de la nueva Constitución Política, que se introdujo la elección popular de gobernadores, y hasta el año 1992, se dio la primera contienda electoral para que estos resultaran elegidos.

Con la firma del pacto político con el M-19, se revivió la discusión por el voto obligatorio, al punto que el periódico El Tiempo, en su edición del 3 de noviembre de 1989, relataba que dentro de lo pactado se incluyó como uno de los puntos, “la implementación del voto obligatorio, en un proceso gradual que comenzara con todos los habitantes en capacidad de votar, menores de 60 años, y que se reglamentara a partir de las elecciones de para Senado y Cámara en 1990”. (Vasco, 1989).

En este momento de la historia, Colombia se encontraba en una coyuntura política, institucional, económica y de corrupción que llamaba a la reforma y la reestructuración del Estado y todos sus sistemas, lográndose a partir de movimientos sociales de presión y la complejidad del contexto, convocarse a Asamblea Nacional Constituyente, de la cual se promulga el texto constitucional vigente, que introdujo significativos cambios en materia de democracia, participación ciudadana y gestión electoral.

En el artículo 103 del texto constitucional se consagra el voto como uno de los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía², fortaleciendo el sistema de partidos políticos, los demás mecanismos de participación ciudadana, y garantizando un verdadero escenario para la democracia, que diese cumplimiento a los fines del nuevo modelo de Estado adoptado. En 1994 se promulga la ley 134, estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo, en la cual se reconoce el voto como un mecanismo de participación de los ciudadanos en los procesos electorales, y en otros mecanismos que requieren de la decisión del pueblo.

En este sentido, la consagración del ya mencionado artículo en su literalidad, representa un avance en materia de consolidación del voto como una herramienta para la democracia, ya que a diferencia de las reformas adoptadas estando en vigencia la Constitución Política de 1886, donde el voto se concibió como un derecho de determinados ciudadanos, en la nueva regulación constitucional se consagró en una doble dimensión, la de derecho y la de deber, lo que permite dilucidar el voto obligatorio como una reforma plenamente acorde a la Constitución misma, pero sobre todo, benéfica a la democracia.

2. Del concepto de ciudadanía y la relación del individuo con el Estado. (Ciudadanía política – Ciudadanía social).

La relación ciudadano – Estado, remonta de manera inmediata a la antigua Grecia, especialmente a la ciudad de Atenas, donde la *civitas* o ciudadanía era ejercida sólo por hombres libres, y con reconocimiento dentro de la *Polis*, quienes contaban con múltiples beneficios o prerrogativas, por el hecho de ser ciudadanos atenienses, tal y como lo expone

² Véase artículo 103, Constitución Política de Colombia.

Aristóteles en su reconocida obra *La Política*, el expresar que “llamaremos, pues, ciudadano al que tiene derecho de participar en el poder deliberativo o judicial de la ciudad; y llamaremos ciudad, hablando en general, al cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia autosuficiente” (Aristóteles, 1999). Plantea el filósofo dos importantes acepciones, por un lado, las implicaciones de ser ciudadano, en cuanto que se le habilitaba para la participación activa en los quehaceres de la polis, y por otra, el concepto de ciudad, aunque adaptado a la época actual, sería más de sociedad política, toda vez que se entiende como aquel conjunto de ciudadanos, habilitados para participar en los asuntos públicos y con poder de decisión.

Sin embargo, se debe abordar la temática desde lo existente antes del Estado, esa forma natural de vida en la que coexistían los individuos sin interrelacionarse de la manera como hoy se conoce, a las comunidades primitivas, donde el mundo se gobernaba por leyes naturales, propias del instinto de supervivencia, para lo que se debe abordar la temática desde el pensamiento de Thomas Hobbes, quien plantea que fue a partir de las dificultades propias de la supervivencia, y de las necesidades que acompañaban la existencia del individuo, que este se vio obligado a buscar formas de asociación, a ceder desde su voluntad en algunos asuntos, para asumir lo que en la colectividad resultase conveniente, es decir, empezar a entregar parte de sus libertades, para que fuesen administradas de manera común, en favor del colectivo, en este sentido, Francisco González (2012), hablando de los postulados de Hobbes, manifiesta que:

Los hombres, en el Estado de naturaleza están expuestos a la muerte violenta, esto conlleva a que cada hombre busque los mejores medios para defenderse de aquellos que puedan ser enemigos potenciales. Esta situación de desconfianza generalizada

conduce a que comunidades de hombres se reúnan, en gran número, para poder enfrentarse y defenderse de otros grupos de hombres. (González, pág. 83).

Fue en ese momento, en el que apremiaba la necesidad de consolidar comunidades para afrontar las dificultades, para sobrevivir y defenderse de los ataques de otros hombres, donde nace el Estado, como una figura en la que convergen múltiples individuos, y cada uno, desde su sesión de libertades y voluntad, conforman una sola *persona*, que representa sus intereses, administra sus libertades y prerrogativas en pro del mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad de la comunidad. Esa participación del individuo, la describe Hobbes afirmando:

El hombre, como elemento constitutivo del Estado, debe ser estudiado con el fin de describir por qué algunos Estados, a lo largo de la historia han colapsado. Es necesario conocer a fondo la naturaleza de los hombres, cómo se expresan y cómo actúan, movidos por la variedad de sus pasiones. De estas depende que los hombres se articulen como las piedras que constituyen un edificio, cada uno cumpliendo una función determinada para el bienestar del conjunto en general. (Hobbes, *El Leviatan*, 2003, pág. 125).

Lo anterior, es la base del contrato social de Hobbes, y de toda la teoría contractualista, retomada incluso por otros autores en la posteridad, a partir de la cual, en esa entrega colectiva de voluntad y libertades, se construye un pacto en que todos se obligan, se establecen unos mínimos de derecho, reglas de convivencia, normas, todo un andamiaje administrativo que terminará siendo la funcionalidad del Estado a través de sus instituciones, dependiendo la forma de gobierno.

El tránsito de un Estado de naturaleza a un Estado político y jurídico lleva consigo la transformación de conceptos como el de ciudadanía, participación ciudadana, la relación

entre la persona y el Estado, entre otros. Sin embargo, dicha transformación o evolución a la consolidación de ese Estado, es una constante renovación del pacto social, de los compromisos sociales afrontados por la colectividad, en favor de todos sus miembros, así,

Los hombres mediante la unión pactan distintas formas y maneras de ayudarse, para superar el Estado de naturaleza, a través de la renuncia al derecho sobre todas las cosas. Por el pacto los hombres ceden su derecho natural y establecen a otro hombre como garante de los pactos realizados entre ellos, para que determine cuando un pacto ha sido transgredido y el castigo que conlleva incumplirlo. Además, que el hombre designado disponga de los derechos de los otros para buscar y ejecutar las maneras más pertinentes de conseguir la paz. (González, 2012, pág. 83).

Así se configura la relación entre el Estado y sus ciudadanos, como unidad compuesta por múltiples miembros, donde cada uno aporta y cede libertades, su voluntad individual, a la constitución de una voluntad general que representa el bienestar de la comunidad, nace así, la sociedad, o como lo expresaría Hobbes el *cuerpo político*, para quien:

Una unión así lograda recibe el nombre de ciudad o sociedad civil; y también de persona civil. Porque cuando hay una voluntad de todos los hombres, debe ser tomada como si fuera una persona; y por la palabra *una* debemos entender que es distinta y separada de todos los hombres particulares, una entidad que tiene sus propios derechos y propiedades. (Hobbes, 2016, pág. 68).

Continuando los postulados del contractualismo social, se debe abordar el pensamiento de Rousseau, quien plantea igualmente, una cesión de poderes desde la individualidad de cada persona a un todo o conjunto, llamada Estado, que representa a la colectividad de la cual hace parte, en este sentido, según el autor, “cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y

nosotros recibimos además a cada miembro como parte indivisible del todo” (Rousseau, 1980). Así, desde el planteamiento del filósofo, se configura la soberanía del Estado, que nace en la unión de sus ciudadanos, y legitima las acciones de sus gobernantes, como expresión de la voluntad misma del colectivo, o por lo menos, de lo que le conviene, en este sentido sostiene el autor:

Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le apetece y puede alcanzar; lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. Para no equivocarse en estas complicaciones es preciso distinguir la libertad natural, que no tiene más límite que las fuerzas del individuo, de la libertad civil, que está limitada por la voluntad general. (Rousseau, 1980, pág. 42).

Con todo lo anterior, se observa el tránsito que, desde los inicios de la historia, ha debido darse en materia de la consolidación del Estado, del cambio del Estado natural, al Estado jurídico y político, a la sociedad y cuerpo político, donde prima la voluntad general, y donde nace el concepto de ciudadanía, de participación y de la soberanía que radica en el pueblo.

En este mismo sentido, se podía observar la concepción de *república* ligada a la idea de *soberanía*, desde el pensamiento de Jean Bodin cerca de los años 1550, herencia de la institucionalidad francesa, donde se puede establecer, que para el autor, la nación organizada era lo que se concebía como república, es decir, el mismo pueblo como estructura, no la institucionalidad,

Lo que llamamos Estado, es decir, la nación organizada”, se puede observar, como desde la Francia del autor, se hablaba de la necesidad de una nación organizada, lo que se puede traducir hoy, a una sociedad participativa, que busca legitimar a su

Estado, y en las eras modernas de la democracia, eso significa participar de manera activa en los procesos electorales, como una forma de sustentar los gobiernos, sus decisiones, el Estado y su institucionalidad. (Bodin, 1566).

Es así, como debe entenderse el surgimiento de un nuevo concepto, el poder soberano o soberanía, toda vez, que, desde el nacimiento del Estado, si bien es un poder soberano, no es en sí mismo fuente de dicho poder, sino que, por el contrario, lo adquiere del conjunto de ciudadanos, es decir, la soberanía radica en el pueblo, y se le trasfiere al Estado, a través del pacto o contrato social. Es decir, la soberanía se construye de los aportes de voluntad y libertad de cada ciudadano, con lo que se constituye una sola voluntad, es decir, el pueblo se constituye como una masa que decide, y legitima la existencia de su Estado, la de su gobierno, y, por tanto, las decisiones del mismo. En este sentido, se podría tomar del pensamiento de Thomas Hobbes, su postura en favor de que:

El poder supremo es el resultado de la suma de los poderes y las facultades de los hombres que conforman el Estado. El hombre al crearlo le confiere sus propiedades inherentes, intrínsecas. Ahora bien, el poder de los hombres es manifestado en sus acciones que son la ejecución de las facultades corporales y mentales. El poder natural, para Hobbes, radica en la capacidad de movimiento del hombre por voluntad propia; asimismo cuando se crea un Estado, este puede ejecutar acciones voluntarias en virtud de los derechos transferidos. (González, 2012, pág. 83).

El concepto de soberanía, fundado en el pueblo, es también compartido por Montesquieu, quien, en su obra *Del espíritu de las leyes*, expresa que es el pueblo la fuente de la soberanía, no el Estado mismo, y que es desde las individualidades manifestadas de manera colectiva, donde cobran legitimidad la existencia de los gobiernos, y, por tanto, sus acciones, para este autor “cuando en la república, el poder soberano reside en el pueblo

entero, es una democracia”. Es decir, la democracia se fortalece, y se legitima, en la expresión de la voluntad de todos los miembros de la sociedad, sólo eso hace verdaderamente democrático a un Estado y un gobierno, para Montesquieu:

El pueblo, en la democracia, es en ciertos conceptos el monarca; en otros conceptos es el súbdito. No puede ser monarca más que por sus votos; los sufragios que emite expresan lo que quiere. La voluntad del soberano es soberana. Las leyes que establecen el derecho de sufragio son pues fundamentales en esta forma de gobierno. Porque, en efecto, es tan importante determinar cómo, por quien, y a quien se han de dar los votos, como lo es en una monarquía saber quién es el monarca y de qué manera debe gobernar. (Montesquieu, 2007, pág. 42).

Así, se configuró la base de la soberanía popular, radicando esta en el pueblo, o como lo plantea John Locke que “ubicaba el poder soberano en la sociedad civil, esto es, en la mayoría”, lo que ha servido de fundamento para sostener que, a mayor participación e incidencia de la ciudadanía, mayor legitimación, es decir, se solidifica la soberanía, teniéndose como resultado un Estado reconocido por sus propios ciudadanos y una institucionalidad respetada y obedecida. (Machperson, 2005). Para Locke, no radica la soberanía en el poder del gobernante, ni tampoco establece su origen en las guerras que llevan a determinado gobernante al poder, para el filósofo, la soberanía recae en el pueblo por derecho natural, y es por esto, que él establece la posibilidad de un control político a sus gobernantes cuando estos violan derechos de sus pueblos, lo que llega a justificar incluso a través del uso de la fuerza contra los gobernantes de turno, así,

Mientras que para Hobbes el poder del soberano es absoluto e irresistible y los súbditos están obligados a una obediencia incondicionada a las leyes, Locke concibe una forma política cuyo poder no sea irresistible. El poder político que surge de la

inseguridad del Estado de naturaleza no es un poder que emerge de la guerra de todos contra todos, sino un poder determinado por el contenido de las leyes naturales. De este modo, el poder político está enmarcado por el conjunto de deberes y derechos definidos mediante las leyes naturales. Cuando el gobernante viola estos deberes y derechos se pone a sí mismo en un estado de guerra respecto a su pueblo. Ante esto, el pueblo adquiere el derecho legítimo, transformado así mismo en deber, de resistir al príncipe o a quien ejerza el poder político, incluso si fuera necesario, con la fuerza. (Cortés, 2010).

Alcanzado este nuevo concepto de ciudadanía, el cual lleva inmerso el componente político activo y de participación, de adjudicación de derechos y asimilación de deberes dentro de un escenario comunitario, político, democrático y participativo, en este mismo sentido, para el Instituto de Estudios Latinoamericanos, la ciudadanía tiene una doble connotación “una, poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad política; otra, obtener un reconocimiento de esa comunidad política a la que se pertenece. La pertenencia y el reconocimiento a una comunidad tiene deberes y tiene derechos”. (IEL - Freie Universitat Berlin).

En Colombia, la concepción del Estado social de derecho es producto de todos estos fenómenos que armonizan el contexto de lo social y lo político, cada vez con cambios de paradigmas que ponen en entredicho la manera como se diseñó un marco normativo alejado de una efectiva materialización de participación y democracia en los distintos escenarios de la vida política, social, cultural y administrativa del país, desatendiendo la inspiración del constituyente de 1991.

Es así como se llega a un concepto más avanzado y profundo como la ciudadanía política, entendiéndose esta, como aquella que está ligada a la participación e incidencia del

ciudadano en los asuntos públicos, administrativos y electorales del Estado, en cuanto que “connota el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros” (PNUD - ONU, 2014). Esto permite inferir, que el constituyente colombiano plasmó en la Carta Política un modelo de ciudadanía política, al establecer en su artículo 40, en la categoría de derecho fundamental, que:

Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. (Constitución Política de Colombia, Art. 40).

Entendido el fundamento de la ciudadanía política en Colombia, y teniendo claro que el firme objetivo de la misma es maximizar la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos y de interés general, como una forma de expansión de la democracia y de materialización de la misma, se cuenta dentro del ordenamiento jurídico colombiano con siete mecanismos de participación ciudadana, que permiten llevar a la praxis un verdadero ejercicio de la ciudadanía política, siendo estos, y en los siguientes términos del artículo 103 constitucional “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará” (Constitución Política de Colombia, Art. 103).

2.1. Diferencias entre ciudadanía política y ciudadanía social.

Resulta importante realizar una diferenciación de lo que se considera ciudadanía política y ciudadanía social, entendiéndose esta última como la garantía "desde el derecho a un mínimo de bienestar y seguridad económica, hasta el derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo con las pautas vigentes en la sociedad" (Pérez, 1998). En este sentido, tiene que ver la ciudadanía social, con los deberes que tiene el Estado para con sus habitantes y las garantías mínimas que este debe suplir, en términos de condiciones y calidad para el desarrollo de la vida. Es entonces este, un segundo estadio de la ciudadanía, el cual “sólo tras el establecimiento del sufragio universal y la generalización de la solidaridad social despertada por la expansión de los derechos políticos fue posible llegar al último estadio en el desarrollo de la ciudadanía: es decir, a la "ciudadanía social". (Pérez, 1998, pág. 36).

La ciudadanía social se entiende como un escenario ideal de la democracia en el cual convergen las garantías por parte del Estado, una sociedad democrática y participativa,

incluyente, en ultimas, las condiciones ideales para el desarrollo del individuo, para ello, se requiere de un Estado armónico, con coordinación administrativa, órganos enfocados en el cumplimiento de sus fines en condiciones de eficiencia y calidad, en ultimas, se requiere de una transformación de la cultura política y social que garantiza ese estado ideal de armonía. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los Estados asumen en materia de ciudadanía social, una responsabilidad con sus ciudadanos y habitantes, en la medida que:

Las naciones del mundo, y ciertamente de América Latina, reconocieron explícitamente desde mediados del siglo XX que toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure educación, salud y bienestar, por lo tanto, derecho a acceder a los servicios sociales necesarios para que ello ocurra. Así se reconoció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reconoce en la mayoría de las constituciones nacionales. Estos derechos fueron objeto de un reconocimiento más explícito en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas,¹ suscrito y ratificado por todos los países de la región. Los países firmantes se comprometían a crear las condiciones que le permitieran a cada ciudadano y ciudadana tener acceso garantizado a un nivel legalmente establecido y, por ende, exigible, de satisfacción de sus derechos económicos y sociales. (PNUD, 2014).

Representa entonces la ciudadanía social, el fin al que debe llegar la democracia, es una meta para los Estados y administraciones enfocar sus esfuerzos en maximizar los beneficios del Estado, en condiciones de equidad, promoviendo el bienestar, la garantía de derechos y el desarrollo humano en sus diferentes manifestaciones para con sus habitantes y ciudadanos.

3. Participación política convencional y no convencional.

La participación política debe entenderse ligada al concepto y al ejercicio de la democracia. De cierta manera, para que la democracia sea legítima, y por tanto las decisiones trascendentales del Estado, se necesita de la participación política, siendo esta la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en los acontecimientos políticos; es decir, son las acciones que realizan los ciudadanos para incidir en los asuntos de un Estado.

La participación política es la sumatoria de todas las acciones o posibilidades que tienen los ciudadanos de intervenir o ingerir en la toma de decisiones dentro de la estructura del Estado, la elección de gobernantes, la construcción, selección e implementación de las políticas que, desde el poder central, regirán el Estado en sus diferentes órdenes y niveles.

La participación política, dependiendo de su forma y método, puede clasificarse de dos maneras: (i) participación política convencional, y (ii) participación política no convencional. En este sentido,

Dos niveles fundamentales caracterizan a la participación ciudadana. Por un lado, la participación esta reglada y condicionada, por los canales formales establecidos por los distintos Estados. En este nivel se plasma una igualdad política construida, principalmente, a partir del concepto de ciudadanía como articulación universal de derechos y obligaciones. Por el otro lado, la participación es también el resultado de una serie de circunstancias -económicas, sociales y culturales- que se conectan con maneras distintas de participar políticamente. Más allá de las reglas formales, los distintos individuos presentan actitudes y actividades diferenciadas de lo político que

condicionan a la participación ciudadana como componente fundamental del sistema democrático. (Brussino, 2005).

3.1. Participación política convencional.

Se conoce como participación política convencional, a aquella que se da dentro del marco constitucional y legal de un Estado, mediante los mecanismos establecidos para tal fin, ajustándose a todas las regulaciones impuestas por el Estado en materia de participación política y ciudadana, es decir,

La acción política convencional comprende un conjunto de comportamientos que se circunscribe a lo que las normas y leyes de un país haya regulado como vías de participación política; por antonomasia, la conducta convencional más sobresaliente es el voto y la mediación institucional más destacada son los partidos políticos. (Fernández, J. S. y Rojas, A. J., 2003, pág. 41).

Puede afirmarse que la participación convencional es el ejercicio de los derechos que, en materia de participación política, ha reconocido un Estado a sus habitantes, sea por instrumentos constitucionales o legales, tiene el pueblo la posibilidad de mediante estos conductos, expresar sus opiniones, o tener incidencia en la administración estatal y sus decisiones, en este mismo sentido, para la Subgerencia Cultural del Banco de la República, este tipo de participación política:

Está relacionada con las acciones llevadas a cabo durante un proceso electoral; esta participación es fomentada desde el poder del Estado y la Constitución. La participación política convencional indica el derecho de ciudadanía; es decir, un

derecho al sufragio que no se mide por clases sociales, partidos, sexo o educación. Se da en toda democracia y es un derecho consagrado por la ley, por lo cual puede ser fácilmente controlada y verificada. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, s.f.).

Para el caso colombiano, la participación política convencional se encuentra regulada desde la Constitución Política de Colombia, desde el artículo 2 del texto constitucional se expresa como uno de los fines esenciales del Estado, “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan” (Constitución Política de Colombia, art. 2), así mismo, en el artículo 40, donde reconoce los derechos políticos de los ciudadanos, se consagra como derecho de los ciudadanos la participación política en sus diferentes dimensiones, como elector, como elegible, y en las demás formas que mediante la elección popular permiten la expresión del pueblo respecto de determinadas acciones del Estado.

Especialmente el texto constitucional dedica el título IV capítulo I a regular la participación democrática en Colombia, reconociendo los mecanismos de participación ciudadana, o como los define la misma Constitución, los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de sus soberanías, así lo establece el artículo 103 constitucional:

Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que

constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. (Constitución Política de Colombia, ART. 103).

Queda claro, de la lectura del anterior artículo, cuáles son los mecanismos con que cuenta la ciudadanía colombiana para incidir en los asuntos del Estado, los cuales se encuentran regulados en la ley 134 de 1994 Estatutaria sobre mecanismos de participación ciudadana, sin embargo, se reguló de manera separada, en la ley 131 del mismo año, el voto, como el mecanismo de participación directa más importante, en la medida que permite la participación del ciudadano, en los diferentes mecanismos, es decir, se encuentra en una doble dimensión, como mecanismo a título propio, y a su vez, como instrumento para la ejecución de los demás mecanismos estipulados en el ordenamiento jurídico colombiano.

3.2. Participación política no convencional.

En este escenario, la participación política se realiza a través de mecanismos no consagrados en el marco constitucional y legal del Estado, es decir, es aquel tipo de participación que se da fuera de lo establecido o reconocido por el Estado mismo, sin embargo, ejerce presión sobre el mismo respecto de los temas objeto del pronunciamiento ciudadano, y permite la expresión de poblaciones, que encuentran en estos mecanismos, la forma de hacerse escuchar por la institucionalidad, y por tanto, de buscar ser escuchados o tenidos en cuenta en la agenda pública. En este mismo sentido, para Rucht:

Abarca una serie de comportamientos muy amplios que no corresponden con las normas y costumbres definidas bajo un régimen particular; entre las expresiones más importantes estarían las sentadas, los bloqueos, las campañas, las concentraciones, las

reivindicaciones, los sabotajes, las marchas o la desobediencia civil... que obviamente predominan en el ámbito de los nuevos movimientos sociales como feministas, ecologistas, pacifistas o alternativos (Rucht, 1992).

Puede entender esta forma de participación política, como una expresión propia de la sociedad respecto del Estado y sus acciones, es decir, una forma de participación social, ya que es directamente la sociedad la que se levanta con el fin de exigir sus derechos, de dar a conocer sus posiciones y necesidades, y de exigir del Estado una respuesta respecto de determinadas problemáticas o situaciones que sean la génesis de la movilización. A nivel doctrinal a esta, la participación política no convencional, también se le ha denominado acción directa, así, para Alberto Melucci, se recogen bajo este concepto:

A las formas de resistencia o de intervención colectiva, las cuales poseen un mínimo de organización, aunque no impliquen una institución formal; son distintas a las acciones políticas normales porque incluyen en algunos casos transgresiones de las reglas dentro del juego político, aunque no persigan socavar las bases ni cambiar el sistema de relaciones de dominación social; no es característico en ellas el uso deliberado y continuado de la violencia, aunque puede llegar a emplearse; tampoco se deben considerar acciones expresivas sino más bien instrumentales porque siempre poseen una dimensión estratégica que calcula los efectos públicos y los costes/beneficios. En definitiva, los distintos modos de acción directa constituyen una experiencia de participación alternativa y el ejercicio de alguna manera de la democracia directa (Melucci, 1996).

Para el caso colombiano, estas formas de participación también cuentan con reconocimiento constitucional, y se encuentran amparadas en el artículo 37 de la Carta Política, donde se expresa que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” (Constitución Política de Colombia, Art. 37), sin embargo, se observa que el mismo Estado se reserva la posibilidad de limitar y regular legislativamente este derecho, en la medida que si bien es una expresión democrática y del pueblo, puede llegar a representar una amenaza o posibilidad de desestabilizar la institucionalidad en momentos de crisis política, social, económica, entre otros, que puedan llegar a representar un quiebre o coyuntura para el Estado.

Este tipo de participación o incidencia política se destaca, en la medida que ha representado las luchas por la consecución y reconocimiento de derechos alrededor del mundo, y a lo largo de la historia, debido a que ha sido utilizada para la exigencia de reivindicación de las poblaciones menos favorecidas o marginadas dentro de las sociedades, es este el escenario más social de la participación política, en la medida que se configura como una opción de protesta social y de reclamación ante el Estado,

Históricamente, la protesta política, acción directa o participación política no-convencional surgía del sentimiento de frustración y de la situación de privación, estando ligada a los grupos en desventaja social, minorías reprimidas, o grupos alienados por el orden político establecido. Recientemente, a partir de los años sesenta, el uso de la protesta ha ido incluyendo un espectro cada vez más amplio de grupos sociales y políticos, incorporándose y aceptando estas otras formas de acción política entre los estratos de mayor nivel cultural y educativo. Es decir, la acción

directa cambia de los guetos y arrabales a los centros universitarios y barrios de clase media o acomodada (Dalton, 1988).

La participación política no convencional ha sido cuestionada a lo largo de su desarrollo e historia, en cuanto que se le relaciona con disidencia de las corrientes políticas predominantes, y se convierte en formas de presión para la transformación, en este sentido, se debe entender que:

No es un fenómeno asocial, como quisieran las explicaciones que lo fundan en desviaciones individuales. De hecho, puede establecerse un plano analítico en el que se despliegan los modos de participación política no convencionales según se aproximen o no a la normatividad establecida. Esto es, puede asumirse que existen diferencias entre los tipos de PPNC dependiendo de la percepción que tengan los actores sobre su contexto social. Mientras que los actos de participación que son más sociales están influidos de manera hipotética por el contexto social y político propio de los tipos de actividad más normalizados³ e individuales (cuyo modelo es el voto), aquellos actos menos institucionalizados están menos influidos por el ambiente sociopolítico y dependen más de percepciones y evaluaciones individuales y colectivas sobre las posibilidades del cambio social. Estos últimos incluyen la revuelta, el boicot, las manifestaciones y mítines, pero también el convencer a otros respecto a quién votar, colocar mantas, llamar a radio o televisión, etcétera. (Contreras, C. Correa, F Y García, L., 2005, pág. 181).

Al encontrar estos mecanismos de participación política no convencional su fundamento y génesis en la sociedad, siendo expresión propia y espontánea de las realidades

que enfrenta el pueblo, y su búsqueda de encontrar soluciones o acciones por parte del Estado que mejoren determinadas condiciones, se debe partir del análisis de causas y las motivaciones de dichas acciones ciudadanas, pero lo que se puede hacer uso de herramientas brindadas por la psicología social y política, desde donde resulta más fácil comprender la realidad de los ciudadanos, y los diferentes actores sociales, y de esta manera, entender las causas de las acciones de participación social.

De esta manera, las prácticas que no se desarrollan apegadas a la ley y que tienen como finalidad generar un cambio frente a situaciones propias de una sociedad o población, en este sentido, pueden gestarse dentro de determinados grupos identitarios que comparten al menos dos percepciones comunes o problemáticas: por un lado, puede percibirse un ambiente injusto contra la población determinada, donde se evidencia la carencia de apoyo por parte del gobierno y las instituciones que lo conforman y representan, y por otro lado, la percepción generalizada de que los mecanismos institucionales en los términos propuestos por el mismo Estado, no garantiza verdaderos procesos de cambios en la medida en que se desean o requieren.

4. Sistema y comportamiento electoral.

Hablar de participación política implica conocer el funcionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos, en cuanto a que es mediante este sistema que se ejecutan las elecciones, se constituyen las listas, se convoca a consultas respecto de determinados temas y se define quienes entrarán a conformar los cuerpos colegiados y demás cargos de elección popular. En este sentido, la democracia no se refiere de manera exclusiva al proceso

electoral, aunque el hecho de poder elegir a las personas que nos representan en el organigrama del Estado es uno de los aspectos fundamentales, siendo relevante conocer el sistema político y electoral del país, para entender, en ese escenario de participación democrática, aspectos relevantes respecto al voto, objeto central de la presente investigación.

4.1. Organización electoral.

Se entiende por organización electoral todo el conjunto de organismos que tienen la función de materializar la participación y garantizar la expresión ciudadana a través de procesos de elección popular. En Colombia, el organigrama electoral está conformado por dos entidades, primeramente, el Consejo Nacional Electoral, que está encargado de conocer de los recursos interpuestos contra los resultados de las elecciones, vigilar de manera estricta el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones, realizar los diferentes escrutinios, distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas y reglamentar los espacios de promoción y publicidad televisiva o de diferentes medios de comunicación, destinados para la divulgación de ideas y planes propios de los actores políticos³.

Para las demás funciones se cuenta con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar, dirigir y vigilar las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana, además de tener a su cargo, la identidad de las personas y el registro civil. La elección del Registrador Nacional, conforme al artículo 266 de la Constitución Política de Colombia, se encuentra supeditada a concurso de méritos, por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

³ Las funciones y atribuciones especiales del Consejo Nacional Electoral se encuentran consagradas en el artículo 265 de la Constitución Política de Colombia.

4.2. El derecho y deber al Voto.

El voto se ha constituido en la herramienta a través de la cual la ciudadanía elige a sus representantes. De manera general, se ejerce en los periodos de elecciones. La representación de esta manera se logra por obtener la mayoría de los votos. El voto es el mecanismo de participación ciudadana por excelencia y se podría afirmar que se ha convertido en un mecanismo ampliamente usado en acciones para elegir presidente, vicepresidente, congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados/as, concejales/as y ediles.

De acuerdo con la Carta Política el voto tiene dos dimensiones: la de derecho y la de deber. Primeramente, Votar es un derecho que el Estado garantiza a todas las personas colombianas mayores de 18 años, excepto a los integrantes de la fuerza pública. De igual forma, votar es un deber ciudadano⁴, en cuanto que todos los ciudadanos tienen la responsabilidad frente al Estado, de participar en la vida pública, cívica y política del país. En este sentido, si bien el voto no es obligatorio, para la materialización de la democracia se hace necesario que la ciudadanía participe activamente y validen las decisiones de interés general, partiendo de que, a mayor participación, mayor legitimidad del elegido. Por todo lo anterior, la participación mediante el voto se considera un apoyo a las instituciones democráticas y como tal es reconocido, facilitado y estimulado por las autoridades, lo que se fundamenta en una concepción materializadora de la democracia, desde una perspectiva

⁴ Como lo consagra la Constitución de la República Federativa del Brasil, en su artículo 14,1 "porque constituye un deber irrenunciable de la ciudadanía" donde establece como obligación ciudadana el ejercicio del sufragio. Así mismo, La constitución de Honduras, señala en su artículo 111 que "El sufragio es un derecho y una función pública del elector", de la misma forma que la Constitución de Costa Rica determina que "El sufragio es una función cívica primordial y obligatoria" como lo consagra en su artículo 93, o el caso del Código Electoral de El Salvador, en el que se establece que "El sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos", conforme a lo estipulado en su artículo 3. (Baeza, 1998, p.110).

coercitiva que pueda funcionar como garantía constitucional del ejercicio del sufragio, en este sentido el voto obligatorio:

Es un componente del sistema de elección político participativo de la Democracia de carácter coercitivo. Esto, porque el voto obligatorio hace cumplir el mandato constitucional de elegir y ser elegido con el objetivo primordial de consolidar la participación y elección ciudadana en su máxima expresión constitucional. (Beleño, 2017, pág. 139).

Con lo anterior, no se debe ver el voto obligatorio como una restricción a la democracia, ni como un menoscabo a los derechos fundamentales del electorado, por el contrario, se establece como una herramienta tendiente a dinamizar los procesos electorales, elevando los índices de participación, promoviendo nuevos retos políticos al activarse nuevos electorados que no participaban de las contiendas, lo que permite a su vez, la diversificación de la población electoral, en la medida que:

La participación electoral obligatoria satisface más adecuadamente las promesas igualitarias de la democracia por cuanto, en general —y esto avalado por la evidencia comparada—, en los sistemas voluntarios los que no participan tienden a pertenecer mayoritariamente a los niveles socioeconómicos más bajos. Por lo tanto, en vista a promover la representatividad de los intereses de los grupos menos favorecidos en la escala social —quienes son a su vez los menos capacitados para influir en las decisiones públicas, y los que más dificultades tienen en asociarse y agruparse para defender sus intereses— se justificaría implementar la obligatoriedad de la participación electoral. (Tomás, 2005).

De esta manera, el voto obligatorio, pese a que no renuncia ni deja a un lado su condición de derecho fundamental, asume un segundo escenario, el del deber⁵, el cual, tal y como se observa no representa alteración alguna al orden democrático, por el contrario, es una herramienta de legitimación de los gobiernos y de las instituciones, de la democracia misma, lo que hace razonable y constitucional la implementación del voto obligatorio⁶.

4.3. Características del Voto.

El voto, como mecanismo de participación ciudadana, o instrumento de otros, encuentra su fundamento en diversos principios, siendo el primero de ellos el hecho de ser Universal. El sufragio es el derecho⁷ que le corresponde a todos los colombianos mayores de edad, sin distinciones de etnia, religión, género, situación socioeconómica, nivel educativo o posición política de participar en las contiendas electorales.

Libre: Los y las votantes deben elegir a sus candidatos y candidatas de manera autónoma, siguiendo sus propias opiniones. La decisión de los y las votantes debe estar libre de amenazas, coacciones, intimidaciones o cualquier otra forma de presión.

⁵ En sentido contrario a la hipótesis desarrollada en la presente investigación, manifiesta Sierra Lucas que “lo que no puede haber es un deber jurídico de votar, pues, [...] el deber jurídico hace mutar el carácter normativo del voto como derecho, transformándolo en un deber. Esto, además de contrariar el origen histórico liberal del derecho a voto, arriesga peligrosas consecuencias político-constitucionales. Si es un deber, el poder del soberano aumenta enormemente sobre los ciudadanos. Si es un derecho, en cambio, no”. (Sierra, s.f.)

⁶ El derecho de sufragio, como los demás derechos fundamentales, puede ser entendido en sentido subjetivo y en sentido objetivo. Desde el primero, aparece como una facultad del titular del derecho garantizada por el ordenamiento, esto es, como un derecho de libertad; el derecho a votar (o a presentarse como candidato) y por lo mismo también la libertad de no votar. (Aragón, 2007)

⁷ Contrario a la hipótesis planteada en la presente investigación, “este es, entonces, el argumento de principio más poderoso: el voto voluntario refleja en la forma más nítida el carácter del voto como un derecho. Éste es el origen histórico del sufragio y la razón por la cual es tan valioso para los liberales. El voto es un derecho que se tiene frente al poder políticamente organizado en el Estado e incluso, como todo derecho básico, se puede llegar a tener contra el Estado. No discuto que votar pueda ser un deber moral o cívico, pero esto no debe llevarnos a convertirlo en un deber jurídico”. (Sierra, s.f.)

Personal: El ejercicio del derecho al voto requiere de la presentación personal del elector en la urna y que se acredite su mediante la presentación de la cédula de ciudadanía. Esto porque el voto es la manifestación autónoma, espontánea y auténtica de la voluntad individual de los electores.

Secreto: partiendo de que el voto es una manifestación libre, espontánea y auténtica de la voluntad de cada ciudadano, frente a lo que el Estado debe garantizar absoluta de sus preferencias electorales.

Igualdad: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen idéntico derecho a votar y a que sus votos valgan lo mismo, sin que sea posible distinguir la importancia del voto en función de criterios de propiedad, educación, religión, etnia, género o posición política. (Coronel, C., 2005).

Capítulo II:**EL DEBER DEL VOTO. ANÁLISIS DE REFERENTES.****1. Estudio de ordenamientos jurídicos electorales de América del Sur. Análisis de referentes.**

El proceso de consolidación de modelos democráticos alrededor del mundo a acumulado diferentes decisiones, estrategias, acciones, e imposiciones normativas, siendo una de las más reconocidas, el voto obligatorio, como una forma de exigir la participación por parte de la ciudadanía, maximizar la legitimidad de la democracia, y por tanto de los gobiernos y las decisiones que estos toman en ejercicio de sus funciones.

A manera de caracterización del voto obligatorio, se observa que, en modelos más sólidos de democracia y participación ciudadana, disminuye la existencia del voto obligatorio, es así como en Europa, solo cinco Estados cuentan con dicha obligación para sus ciudadanos, siendo estos Bélgica, Chipre, Grecia, Italia y Luxemburgo. Mientras que, en regiones en proceso de consolidación de una verdadera democracia, como América Latina, es una tendencia el voto obligatorio, toda vez que se entiende como una forma de estimular la participación, generar cultura política, y alcanzar así una ciudadanía política activa.

A continuación, se hace una caracterización de la situación electoral de siete países de América Latina, donde se pueden observar tanto similitudes como diferencias en los modelos, sin embargo, se debe resaltar, que todos, prometen ser una democracia, y desde sus disposiciones constitucionales, se trazan la labor de consolidar una sociedad participativa, con ciudadanía activa, o como lo diría Hobbes, un verdadero *cuerpo político*.

Criterios	Venezuela	Perú	Uruguay	Argentina	Brasil	Bolivia	Chile
Capacidad para ejercer el derecho al voto – Voto voluntario u obligatorio	18 años	18 años. Los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes están obligados a votar	Voto obligatorio desde los 18 años.	16 años para nativos y 18 para naturalizados. Voto obligatorio.	Voto obligatorio desde los 18 años	Voto obligatorio desde los 18 años	18 años
Tercera edad	Sin restricción de edad	Para los mayores de setenta (70) años el voto es facultativo.	Sin restricción de edad	Obligatorio hasta los 70 años.	Voto voluntario para los mayores de 70 años	Sin restricción	Sin restricción
No pueden ejercer el derecho al voto	Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política	Por resolución judicial de interdicción; Por sentencia con pena privativa de la libertad; Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.	Quienes estén cumpliendo una pena, ineptitud física o mental o restricción a los derechos políticos	Declarados interdictos, condenados por sentencia judicial, los inhabilitados o con derechos políticos restringidos.	los extranjeros y, durante el período del servicio militar, los reclutados	Quienes pertenezcan a grupos armados ilegales, defraudación de recursos públicos o traición a la patria.	Declarados interdictos, condenados o con restricción de derechos políticos por decisión judicial.
Modelo electoral	Elección para cargos unipersonales y por representación para los colegiados	Voto popular obligatorio para representación unipersonal y representativa en cuerpos colegiados	Elección de representación unipersonal y colegiada	Elección por voto popular obligatorio	Elección por voto popular, universal y obligatorio para cargos unipersonales y colegiados	Elección por voto popular de representación unipersonal y colegiada	Elección por voto popular para cargos unipersonales y colegiados
Autoridad electoral	Consejo Nacional Electoral	El Sistema Electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	Corte Electoral	Cámara Nacional Electoral	Tribunal Superior Electoral	Órgano Electoral Plurinacional	Servicio Electoral de Chile

Elección presidente	Votación universal, directa y secreta. Mayoría de votos válidos.	El presidente y Vicepresidente de la República son elegidos por sufragio directo para un período de cinco años. Mayoría de votos.	Elección popular y mayoría absoluta.	Elección popular con doble vuelta	Mayoría absoluta de votos con posibilidad de segunda vuelta	Voto popular por mayoría absoluta	votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos
Elección poder legislativo	Personalización del sufragio para los cargos nominales y de representación proporcional para los cargos de la lista.	se aplica el método de la Cifra Repartidora, con doble voto preferencial opcional.	Voto popular. Sistema de representación proporcional.	Representativo por provincias, por porcentaje según número de habitantes (1 por cada 33 mil).	Elección popular por cuotas federativas de representación	Voto popular. Circunscripciones uninominales por simple mayoría. Circunscripciones plurinominales, sistema de representación	Sistema proporcional inclusivo con cuota de género

Figura No. 1. Aspectos del sistema electoral de siete países de América Latina. Fuente, Constituciones Nacionales. Elaboración propia.

Del cuadro anterior se obtienen múltiples apreciaciones a nivel comparativo, las cuales se pueden abordar desde los mismos criterios utilizados en el gráfico para plantear las conclusiones:

- **Edad y capacidad para ejercer el voto:** Se evidencia que solo en Argentina se tiene la edad para ejercer el voto, por debajo de los 18 años, allí, con la condición de que se sea nativo argentino, se puede ejercer el sufragio desde los 16 años, sin embargo, sólo es obligatorio desde los 18, cuando se cumple la mayoría de edad.
- **Tercera edad:** En los países con voto obligatorio la tendencia es que esto vaya hasta la edad de 70 años, excepto por Uruguay, donde no hay límite en cuanto a edad para la obligación de ejercer el sufragio.
- **Imposibilidad el ejercer el voto:** Se mantiene como constante la interdicción, las sentencias judiciales o restricciones a los derechos políticos.
- **Modelo electoral:** En todos los países abordados, se tienen las elecciones de tipo unipersonal, para los cargos del ejecutivo, y las de presentación, para los cuerpos colegiados y legislativos.
- **Autoridad electoral:** Todos los Estados cuentan con una autoridad electoral a nivel nacional, que coordina las diferentes elecciones, se encarga de los escrutinios y de dar los resultados oficiales de cada contienda.
- **Elecciones nacionales:** En todos los Estados abordados es común la necesidad de mayoría absoluta para la elección de presidente, y en cuanto al legislativo, la asignación de escaños de acuerdo con las provincias o Estados, y según la población de los mismos.

Pese a la caracterización anterior, resulta indispensable analizar más a fondo cada uno de los mencionados países, para conocer su realidad electoral y puntualmente, la condición del voto.

1.1. El Voto en Venezuela.

Desde el preámbulo del texto constitucional venezolano, se plantea la construcción de una sociedad democrática, participativa y protagónica, y ya en el artículo segundo, respecto del modelo de Estado, se consagra que:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art. 2).

De lo anterior, se hace evidente la existencia de un orden democrático, participativo y pluralista, en el que el pueblo debe tener participación ciudadana garantizada por el Estado, incidencia en la agenda pública y las decisiones del Estado, y, por tanto, como herramienta de materialización, un sistema electoral y de elección, que, por tanto, se debe alcanzar a través del voto.

El artículo 62 reconoce la participación ciudadana tanto de manera directa como indirecta, es decir, la incidencia propia en la agenda pública, y la que se hace a través de los representantes elegidos por el pueblo para que sean voz de sus intereses en los diferentes estamentos del Estado. Así mismo, impone en una doble dimensión, el derecho y deber de la participación política y democrática, tanto para el Estado como para los ciudadanos, a partir de este reconocimiento.

En cuanto al ejercicio del derecho al voto, la Ley orgánica de los Procesos Electorales de Venezuela, es clara al consagrar de manera taxativa la voluntariedad del voto, es decir, descarta de plano la existencia o adopción de medidas que coaccionen el ejercicio de este derecho, o que pretendan hacerlo obligatorio para los ciudadanos, la literalidad del artículo 126 de la norma en cuestión expresa que “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio” (Ley Orgánica de Procesos Electorales , Art. 126). Adicionalmente, los artículos 127 y 128, en materia de ejercicio del derecho al voto, resaltan la individualidad del mismo, la garantía de que sea una decisión personal, libre y espontánea, que no admite imposición alguna y que el Estado garantiza su ejercicio de manera libre, reiterando entonces la imposibilidad desde el orden constitucional y electoral, de un modelo de sufragio obligatorio.

1.2. El Voto obligatorio en Perú.

El preámbulo constitucional del Perú, le proclama como un Estado democrático, que obedece a la voluntad del pueblo, y reconoce en su artículo primero como fin de la sociedad y del Estado, el respeto por la persona humana y su dignidad.

La constitución peruana reconoce el voto como un derecho que garantiza los mecanismos de participación ciudadana y materializa la democracia adoptada como modelo de Estado, conforme al artículo 31 constitucional, de manera personal, igual, libre y secreto, sin embargo, le impone a su vez el carácter de obligatorio hasta la edad de setenta años. Así lo consagra la literalidad del artículo “(...) El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad” (Constitución Política del Perú, Art. 31).

Lo relacionado con el sistema electoral peruano se encuentra regulado por la Ley No. 26859 Ley Orgánica de Elecciones, y consagra en su artículo 9 que “Los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes, están obligados a votar. Para los mayores de setenta (70) años el voto es facultativo” (Ley Orgánica de Elecciones , Art. 9). Además, en cada una de las elecciones existentes y en su regulación, al hacerse referencia al voto, se resaltan sus cualidades, siendo éstas *voto directo, secreto y obligatorio*.

1.3. El Voto obligatorio en Ecuador.

Conforme al artículo primero de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” (Constitución Política de Ecuador, Art. 1). Tal y como lo expresa este aparte del texto constitucional, se evidencia el sistema democrático que rige al Estado, lo que permite inferir que cuenta con mecanismos de participación democrática, sistema electoral y de elección popular, siendo el foco de interés, el voto y su desarrollo. Así mismo, el mencionado artículo es enfático al consagrar la soberanía popular y la expresión de la misma a través de mecanismo de participación directa que el mismo texto constitucional crea y reconoce y determina los lineamientos para su correcta implementación en el marco del Estado democrático.

El primer reconocimiento constitucional del voto se encuentra en el artículo 62 de la Carta Política, donde se evidencia su doble dimensión, la de derecho y la de deber, la primera, como materialización y ejercicio de los derechos políticos, y la segunda, como obligación para con la democracia y el modelo de Estado. Así reza el mencionado artículo en su literalidad:

Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones:

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad. (Constitución Política del Ecuador. Art. 62).

Por otro lado, el Estado ecuatoriano cuenta con la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, también conocido como Código de la Democracia, el cual inicia haciendo, de manera similar a la constitución, un reconocimiento al modelo constitucional y democrático del Estado, a la soberanía del pueblo, y a principios que rigen el ejercicio democrático tales como diversidad, pluralismo ideológico, la igualdad, entre otros. El presente código democrático, consagra el voto como la expresión máxima de la voluntad soberana del pueblo que perfecciona y materializa la democracia, en este sentido,

La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del voto popular que será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para garantizar la permanencia y el perfeccionamiento de la democracia. (Código de la Democracia, Art. 10).

Dada la importancia que le otorga la normatividad constitucional y electoral al voto, sus disposiciones se enfocan a garantizar al máximo la participación ciudadana y ejercicio de la democracia, por esto, se contempla al voto en una dimensión obligatoria y una facultativa, cada una bajo unas condiciones o preceptos especiales que determinan, a partir de situaciones propias del votante, el carácter del ejercicio de su derecho político. En este sentido, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica Electoral “el voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de dieciocho años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada”; y, por otro lado,

El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas.

Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral. (Código de la Democracia, Art.11).

Lo anterior muestra como desde la organización del Estado y la búsqueda de la conservación de la democracia, sólo se eximen de la obligación del voto, a personas que bien sea por su edad, carencia de educación, o situaciones personales como estar fuera del país, entre otras, los demás, deben cumplir con su obligación electoral en pro del sistema democrático y de ejercer sus derechos políticos, si bien se puede observar como la obligación a ejecutar el derecho al voto, desde una perspectiva más amplia, se puede ver como la garantía al ejercicio de los derechos de participación democrática y de conservación del orden democrático.

1.4. El Voto obligatorio en Uruguay.

Uruguay se promulga en su Constitución como un Estado democrático en el cual su soberanía recae en la nación, es decir, en el pueblo. A partir de esta premisa, se desarrolla el sistema electoral del Uruguay, y el modelo de sufragio, el cual se debe resaltar que es obligatorio. El artículo 77 de su Texto Constitucional consagra que:

Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible, en los casos y formas que se designarán. El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases siguientes:

1. Inscripción obligatoria en el Registro Cívico.
 2. Votos secreto y obligatorio. La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, reglamentara el cumplimiento de esta obligación. (...).
- (Constitución Política del Uruguay, Art. 77).

A partir de lo anterior, se evidencia la obligación constitucional del obligatorio ejercicio del voto, no quiere decir esto que deje de ser un derecho, sino que, por el contrario, se consagra su obligatoriedad como una garantía para su ejercicio, para maximizar la participación ciudadana, y de esta manera, legitimar la democracia y los resultados de su ejercicio mediante los diferentes eventos electorales.

La Ley No. 13882 por la cual se dan normas sobre Registro Cívico Nacional y se reglamenta la obligatoriedad del voto, desarrolla dicha obligación constitucional reiterándola y estableciendo la constancia electoral o de votación, como prueba del ejercicio del sufragio. Cuando el ciudadano no participe de los comicios, es su obligación justificar su inasistencia dentro de los 30 días siguientes al acto electoral, frente a la Junta Electoral competente por su jurisdicción, y a partir de entonces, la entidad cuenta con 60 días para expedir certificado de que el ciudadano *no pudo votar*.

Las únicas excepciones que admite la normatividad electoral se encuentran consagradas en el artículo 8 de la ley reglamentaria del voto obligatorio, siendo estas

- a) Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impidan el día de las elecciones la concurrencia a la Comisión Receptora;
- b) Hallarse ausente del país el día de las elecciones;
- c) Imposibilidad de concurrir a la Comisión Receptor de Votos durante el día de las elecciones por razones de fuerza mayor; y
- d) Hallarse comprendido en una de las causales de suspensión de la ciudadanía establecidas por el artículo 80 de la Constitución.

La normatividad en cuestión implementa sanciones para los ciudadanos que estando habilitados para sufragar no cumplan con dicho deber, ni demuestren estar amparados por las excepciones expuestas anteriormente, la cual consiste en una multa pecuniaria que será tazada por la Corte Electoral de manera previa a cada evento electoral, esto, conforme a lo consagrado en los artículos 10 y 11 de la Ley 13882.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del sufragio obligatorio, la normatividad electoral uruguaya dispone la prohibición de limitaciones o cualquier obstáculo que tanto las entidades públicas como privadas puedan imponer a los ciudadanos para el libre ejercicio de su derecho y deber al voto y la participación política.

La normatividad electoral dispone además de una serie de consecuencias para el ciudadano que no participe de los comicios electorales ni justifique el no ejercicio de su derecho y deber al sufragio, esto, como una forma de coaccionar al ejercicio del voto, y fomentar de esta manera la participación política, lográndose así una mayor legitimación democrática desde la soberanía del pueblo, tanto en la conformación del gobierno en lo

concerniente a los cargos de representación indirecta, y a las diferentes disposiciones que sean sometidas a procesos electorales. Siendo estas consecuencias:

- A) Otorgar escrituras públicas, salvo testamentos y la provenientes de ventas Judiciales. En este último caso la excepción no rige para el comprador;
- B) Cobrar dietas, sueldos, Jubilaciones y pensiones de cualquier naturaleza, excepto la alimenticia;
- C) Percibir sumas de dinero que por cualquier concepto les adeude el Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipio, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados);
- D) Ingresar a la Administración Pública. Esta prohibición no será subsanada con el pago de la multa provista en el artículo 10 de la presente ley;
- E) Inscribirse ni rendir examen ante cualesquiera de las Facultades de la Universidad, ni Institutos Normales, ni Institutos de Profesores;
- F) Obtener pasaje para el exterior de ninguna empresa o compañía de transporte de pasajeros. (Ley 13882 (Uruguay), Art. 13).

Como causal de agravación de la conducta de no ejercer el derecho y deber al voto, frente a las consecuencias, especialmente las pecuniarias, la ley establece el ser funcionario público y el ser egresado de la Universidad de la República, así lo dispone el artículo 14 de la Ley Electoral “Las multas establecidas en el artículo 10 se duplicarán cuando los ciudadanos omisos tengan la calidad de profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República, o funcionarios Públicos” (Ley 13882 (Uruguay) , Art. 14), además, para el caso de los funcionarios públicos, impone la normatividad una serie de sanciones pecuniarias y restrictivas que coadyuvan en el cumplimiento de las obligaciones.

Con todo lo anterior, se evidencia la importancia que, desde la Constitución y la normatividad en materia electoral, Uruguay estableció un ordenamiento rígido y severo con el fin de garantizar la participación política de sus ciudadanos, de promover el orden democrático, materializar y hacer efectiva la soberanía popular, pero, sobre todo, legitimar las decisiones trascendentales para el Estado.

1.5. El Voto obligatorio en Argentina.

Argentina, desde el artículo primero de su texto constitucional se promulga como una república representativa federal, lo cual lleva implícito un modelo democrático, electoral y de participación ciudadana.

La historia electoral y del voto en Argentina estuvo marcada por diferentes periodos, algunos, marcados por la corrupción, y por la simulación de un modelo democrático, es decir, se hacía creer al pueblo que se les permitía la participación, sin embargo, las decisiones eran tomadas por las elites y las clases perpetuadas en el poder, para lo que adoptaban formas de votación como el voto cantado, que era una forma de votación a viva voz, donde un jefe de grupo, lideraba la votación de un número determinado de votantes. En este sentido, el historiador Daniel Balmaceda expone que:

Si bien la primera ley electoral Argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires, bastante limitada, ya que sólo contemplaba el voto masculino y calificado, antes de la Revolución de Mayo había ya algún tipo de democracia embrionaria: Estaban los cabildos abiertos. En el del 22 de mayo de 1810 hubo 251 vecinos invitados a tomar la decisión más trascendente de permitir que continuara Cisneros en el gobierno o no. También ha habido otros importantes: en las invasiones inglesas y después. (Diario La Prensa, 2011).

El modelo electoral por vecinos, o que solo reconocía el derecho de participación a quienes ostentaban este título en la sociedad, marginaba de la participación política y ciudadana a diferentes grupos poblacionales, era una posibilidad reservada para las altas clases sociales, así lo describe Balmaceda:

El título que se usaba era el de vecino, es decir aquella persona que tenía derecho a tomar decisiones. Por supuesto, en esto no se incluía a los esclavos, ni a los peones ni a las mujeres. La elección quedaba limitada a una élite. El concepto de pueblo era ese. (Diario La Prensa, 2011).

Todos estos sistemas controvertidos y tendientes a la corrupción quedaron atrás en 1912, cuando se implementó la ley Sáenz Peña, donde se reconoció el voto secreto, pero a su vez, se le impuso la condición de obligatorio. Inició en la Argentina, un periodo de verdadera consolidación democrática, el cual alcanza su mayor fortaleza, dentro de ese contexto histórico, en las elecciones que dieron victoria al peronismo, así lo describe el historiador Marcelo de Alvear:

El voto democrático en serio – secreto, universal y obligatorio, recién se dio del todo en la elección de Perón de 1946. En 1951 se produce el voto femenino. En esas elecciones fue cuando Evita votó en el sanatorio. Precisamente uno de los fiscales era David Viñas (recientemente fallecido). Este fue el momento más alto del peronismo. Perón tuvo más votos que toda la oposición junta. (Diario La Prensa, 2011).

Lo anterior permite evidenciar el cambio trascendental que se logra a partir de la efectiva consolidación democrática, la participación política y el ejercicio definitivo de los derechos electorales de los ciudadanos, al punto de alcanzarse un cambio trascendental en el gobierno, y a partir de ello, en la estructura y funcionamiento del Estado argentino.

Esta nueva Ley Electoral, usualmente llamada Ley Sáenz Peña, mediante la implementación del sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, buscaba incrementar considerablemente, luego de algunos años, el número de votantes y de esta manera maximizar la legitimación de las decisiones trascendentales del Estado. Se encuentra, además, que los actos electorales llevados a cabo con anterioridad a la sanción de la Ley Sáenz Peña presentaban dos características relevantes, (i) por un lado, una pequeña parte de la población tomaba parte de los mismos. En las 11 elecciones Presidenciales anteriores a 1912, la participación electoral sólo alcanzaba en promedio el 1.7 % de la población total, y por otro, (ii) Las elecciones eran usualmente manipuladas a través de diversos mecanismos de fraude electoral.

Los fines que perseguía esta nueva normatividad, eran evidentes, primeramente, promover la participación, el voto se establecía de manera obligatoria; y para reducir al mínimo las acciones delictivas o diferentes artimañas utilizadas a lo largo de la historia, se determinaba que el ejército se haría cargo de la custodia de las elecciones. De esta manera, los métodos para hacer campaña electoral se modificaron espectacularmente, logrando puntos de equilibrio y garantías efectivas de participación e información electoral, y los peores tipos de engaños políticos y fraudes electorales se fueron desterrando de manera gradual en la medida en que se implementaba y aplicaba la normatividad descrita.

En la actualidad, la normatividad electoral vigente de la Argentina consagra de manera taxativa el voto como deber en su artículo 12 del Código Electoral Nacional, y en su artículo 18, crea el registro de infractores al deber electoral. De esta manera establece:

La Cámara Nacional Electoral llevará un registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 12. Luego de cada elección nacional, elaborará un listado por distrito, con nombre, apellido y matrícula de los electores mayores de dieciocho

años y menores de setenta años de edad de quienes no se tenga constancia de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar a la Cámara el listado correspondiente a los electores de su distrito. (Código Electoral Nacional , Art. 18).

Así, se evidencia el desarrollo del voto y su tránsito a la obligatoriedad, como forma de concreción de los ideales democráticos y del fortalecimiento de la participación ciudadana y política, en un escenario completo de garantía de derechos, pero también, de cumplimiento de obligaciones propias del modelo de Estado adoptado por la Argentina.

1.6. El Voto obligatorio en Brasil.

El Estado brasileño, desde su texto constitucional, se promulga bajo un modelo democrático, donde se promueven las libertades individuales, los derechos sociales, civiles y políticas, la participación ciudadana, y una sociedad fraterna y pluralista, a partir de esto, se infiere la existencia de un modelo electoral, y, por tanto, del voto, como forma de expresión de la voluntad y los derechos políticos de cada ciudadano. Desde el artículo primero de la Constitución, se consagra un Estado Democrático de Derecho, entre otras cosas, que se fundamenta en la soberanía, la ciudadanía, el pluralismo político, y reconoce al pueblo como fuente de poder, que se ejerce por medio de representación mediante elecciones.

El capítulo cuarto de la Constitución brasileña, dedicado a los Derechos Políticos, inicia en su artículo 14 reconociendo la soberanía popular y la manifestación de esta a través del sufragio universal y voto directo y secreto, y a su vez, hace la distinción de para quienes es obligatorio o facultativo el ejercicio del sufragio, siendo obligatorio para los mayores de dieciocho años, y facultativo para los analfabetos, los mayores de setenta años, los mayores

de dieciséis años y menores de dieciocho años. En estos términos, el texto constitucional eleva a una doble categoría, es decir, a la de derecho y de deber, el sufragio.

En el caso de los residentes en el extranjero, la normatividad electoral les hace extensiva la obligatoriedad del sufragio, al punto de contemplar sanciones económicas a quienes no presenten la debida justificación de su abstención, siendo las siguientes, además de sanción pecuniaria:

- No poder inscribirse en concurso o prueba para cargos o funciones públicas.
- No poder recibir remuneración o salario por empleo público o en paraestatal.
- Restricciones para obtener préstamos de las sociedades de economía mixta, cajas económicas federales o estatales, o de cualquier establecimiento de crédito administrado en forma total o parcial por el gobierno.
- Restricciones para obtener el pasaporte o la tarjeta de identidad.
- Dificultades al renovar la matrícula en establecimientos de enseñanza oficial o supervisados por el gobierno.

Con todo lo anterior, el constituyente y legislativo brasileño, buscó concretar el ejercicio democrático y garantizarlo incluyendo elementos de coacción, pero, sobre todo, en un doble sentido, acciones que promueven el ejercicio del sufragio, la participación política y el ejercicio eficaz de la ciudadanía.

1.7. El Voto obligatorio en Bolivia.

Desde el preámbulo del Texto Constitucional, Bolivia se consagra como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario y Democrático. Como forma de materialización de lo planteado en su preámbulo, en cuanto al ejercicio de los derechos políticos en el escenario democrático, en su artículo 11 consagra que:

I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley. (Constitución Política del Estado de Bolivia , Art. 11).

A partir del mencionado artículo, se desglosa lo que sería el sistema electoral y de participación política y ciudadana del Estado Boliviano, sin embargo, es en el artículo 26, perteneciente al acápite de derechos políticos, donde se consagra la obligatoriedad del voto a partir de los dieciocho años. De esta manera el Texto Constitucional consagra el derecho y deber de la participación política a través del sufragio:

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

El derecho a la participación comprende:

1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley. 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos. 3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio. 4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios. 5. La fiscalización de los actos de la función pública. (Constitución Política del Estado de Bolivia , Art. 11).

Estas disposiciones constitucionales fueron desarrolladas a través de la ley electoral, en la cual se desglosa todo el contenido del sistema electoral, su funcionamiento, consagra lo correspondiente al ejercicio del sufragio, y en general, todas las disposiciones en la materia. Respecto del voto, en su artículo 3, la norma en cuestión al desarrollar el concepto de universalidad del voto consagra el carácter de obligatorio, y justifica su existencia “porque constituye un deber irrenunciable de la ciudadanía” (Ley Electoral de Bolivia, Art. 3). Adicionalmente, el artículo sexto de la norma electoral consagra que “Todo ciudadano está obligado a inscribirse en el Padrón Electoral, a ejercer el derecho de sufragio, a guardar el secreto del voto y a velar por la libertad y pureza del acto eleccionario” (Ley Electoral de Bolivia).

1.8. Chile, de la transición del voto obligatorio al voto voluntario.

El caso de Chile es de obligatorio estudio, pero, sobre todo, merece un análisis profundo, toda vez, que muestra el escenario de transición de la obligatoriedad del voto, al

voto voluntario. Es el sistema electoral chileno y de participación política, el cual ha reabierto el debate de las ventajas y desventajas del voto obligatorio, de si favorece o no al orden democrático y la legitimación del mismo.

Tras las elecciones presidenciales en las que resultó ganador Sebastián Piñera Echenique, diferentes sectores políticos ponen en la agenda pública el debate de la participación política, el interés de maximizar, sobre todo en la población joven, el interés por el ejercicio de sus derechos políticos y la participación democrática, y desde este escenario, se empieza a promover una tendencia legislativa en favor del cambio de la obligatoriedad del voto, al voto voluntario.

A nivel constitucional, se reconocía la obligatoriedad del sufragio, sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley 20.568 de 2012, modificatoria de la constitución, se pasó de una inscripción voluntaria y voto obligatorio a una inscripción automática y voto voluntario, dejando a la discrecionalidad del ciudadano el ejercicio de su derecho político a sufragar. De esta manera, con la normatividad mencionada, fueron inscritos automáticamente en el Registro Electoral, todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años que no hubiesen sido condenados a pena aflictiva, y los extranjeros residentes en Chile por tiempo superior a cinco años, igualmente, si penas aflictivas, ya no obligándose al ejercicio del voto, exceptuando la imposición de multas o sanciones, y eliminando el procedimiento de justificación y excusa de la abstención en la contienda electoral.

A partir de los porcentajes de participación electoral de las ultimas contiendas, Chile ha abierto una vez más la discusión sobre el voto obligatorio, tomando fuerza la posibilidad de retornar a este sistema, para de esta manera, recuperar la participación política de los ciudadanos. Así lo evidenciaron los medios de comunicación:

Las autoridades esperaban una participación ciudadana no tan alta, pero nunca tan baja como ocurrió finalmente. El domingo 19 de junio los chilenos fueron convocados a las urnas para elegir a los candidatos que participarán en las elecciones municipales de octubre, pero apenas votó el 5,6% (282.000 votos) de los 5 millones de electores habilitados para este sufragio especial. Por primera vez se contó con la supervisión del Servicio Electoral de Chile y con nacimiento del Estado. (El Telegrafo, 2016).

Los bajos índices de participación electoral en las pasadas elecciones dispararon las alarmas de las autoridades chilenas, y han suscitado proyectos de reforma constitucional, proyectos de ley, todos enfocados a si el escenario político actual, exige el retorno del voto obligatorio para reactivar la democracia y la participación ciudadana.

De esta manera, se encuentra el escenario común de América del sur, donde sólo tres países, Chile, Venezuela, y Colombia, cuentan con voto voluntario, en medio de una tendencia regional al sufragio obligatorio como garantía del ejercicio y sostenimiento del orden democrático. Sin embargo, en el caso de Chile, donde ya se tuvo la experiencia del voto obligatorio, se ha generado una nueva tendencia que busca el regreso del voto obligatorio, en la medida que se ha evidenciado el retroceso de la democracia chilena, de su participación política y electoral, a raíz de la designación del voto como voluntario, y en este sentido, argumentos como el de Daniel Bello, Secretario Ejecutivo del Observatorio Democracia, Ciudadanía y Derechos DECIDE, del Departamento de Ciencia Política y RRH de la Universidad Alberto Hurtado, evidencia que la obligatoriedad del voto va más allá de la discusión de si es un derecho o un deber, es un tema de responsabilidad, así,

El voto es un derecho. Mucho ha costado hacerlo extensivo a toda la población mayor de 18 años –en una epopeya verdaderamente “progresista”- como para siquiera entrar a comentar este punto. No tiene sentido. No obstante, de seguro hay quien, en virtud

de alguna ideología cavernaria, quiera rebatir esta afirmación. Está en su derecho, pero quienes salimos ya de la caverna sólo volvemos a ella en busca de arte rupestre, o restos cerámicos.

Desde mi perspectiva, el voto es también un deber. Creo –sin descubrir la pólvora ni mucho menos- que la vida en sociedad requiere no sólo de espacios de libertad; también requiere que los individuos libres asuman responsabilidades mínimas por el bien común. Así como pagar impuestos permite financiar las obras públicas y redistribuir el ingreso, participar del proceso político permite consolidar y perfeccionar los mecanismos de toma de decisiones, y reforzar el sentido de comunidad, todas cosas que van en beneficio del colectivo. La presión ejercida por el total de votantes permite que la clase política se amolde a las necesidades del conjunto social, asegurando que todas las demandas sean escuchadas, aunque, ciertamente, con la distorsión generada por el poder de cada quien. (Bello, 2010).

Como lo argumenta el investigador, la participación electoral permite la consolidación de las instituciones, de los gobiernos y su legitimidad, y como se ha desarrollado en la presente investigación, es precisamente el ejercicio del sufragio una de las formas de sustentar y legitimar la ciudadanía política, teniendo en cuenta que “La obligatoriedad del voto, más allá de hacer de un deber moral uno legal, permite nivelar la cancha, evitando que ciertos grupos sociales monopolicen el poder político, cosa que de hecho ocurre con el voto voluntario” (Bello, 2010).

De esta manera, se evidencia la forma en que el voto obligatorio se convierte en una herramienta para la legitimación en una triple vía, (i) gubernamental, (ii) institucional o

estatal y (iii) ciudadana (ciudadanía política), lo que es natural dada su trascendencia dentro del Estado democrático y Social de Derecho, y en general, al interior de cualquier modelo democrático del mundo, donde se respete la participación de la ciudadanía, pero también, donde dicha participación se entienda como una responsabilidad para con la democracia de su Estado.

Capítulo III: EL VOTO OBLIGATORIO, UN MECANISMO PARA LA LEGITIMACIÓN DE LA CIUDADANÍA POLÍTICA EN COLOMBIA.

1. Del Estado de derecho al Estado social de derecho y su incidencia en la participación ciudadana.

El modelo de Estado social y democrático de derecho adoptado por Colombia, en concordancia con el texto constitucional y la normatividad electoral vigente, han establecido un sistema de participación política y electoral voluntario a través del voto, sin embargo, al momento de las contiendas electorales, los niveles de participación son bajos, lo cual representa una amenaza contra la estabilidad del modelo democrático y participativo del Estado colombiano.

En vigencia de la Constitución Política de 1886, Colombia se consolidó como un Estado de Derecho, en el que el apego a la norma, a la taxatividad del texto legal, y a la necesidad de una regulación específica de cada acción y situación de la cotidianidad, motivó e impulsó la producción legislativa del país. Así mismo, esta constitución con un definido sentido conservador buscó restringir a determinadas clases y círculos sociales la posibilidad de elegir y participar de la vida política, por lo que además de una edad de 21 años para ejercer el derecho al voto, imponía requisitos económicos, de estudios o determinadas profesiones, o en su defecto, múltiples propiedades a su nombre. Así lo consagra la colección de historia del Bando de la República, manifestando que la mencionada Constitución:

Era de índole conservadora y centralista, Constitución que declaró como ciudadanos a los hombres colombianos mayores de veintiún años que tuvieran una profesión u oficio o una ocupación lícita y legítima como medio de subsistencia, aunque esto no era suficiente para poder ejercer el derecho al sufragio, pues para poder ejercer el

derecho a elegir representantes los ciudadanos debían saber leer y escribir y tener ingresos anuales de más de quinientos pesos o propiedades cuyo costo fuese superior a mil quinientos pesos. De esta forma, las elecciones eran indirectas para presidente de la República y Senadores, y directas para concejales municipales, Diputados a las Asambleas Departamentales y Representantes a la Cámara. (Banco de la República, 2015).

La citada Constitución, de fuerte carácter restrictivo, negaba el derecho de votar a las mujeres, a los analfabetos, que, para entonces, se estima fuese más de la mitad de la población del país, y las personas de bajos ingresos o que no eran poseedores de grandes capitales y bienes, por tanto, una constitución que, si bien pretendía ser democrática, estaba lejos de lograrlo por su propia naturaleza restrictiva, centralista y clasista.

Para este momento, Colombia aplicaba un modelo de Estado de derecho, sólido, poco flexible a las reformas, y, sobre todo, que no permitía la incidencia popular y participativa de la ciudadanía en los asuntos públicos, lo que da la razón a lo expresado por Heller, para quien el Estado de derecho “es el resultado provisional de un proceso racionalizador del poder conforme el cual se reivindica y fortalece la burguesía” (Heller, 1997). Este modelo estatal tenía como característica la positivización y el apego a la exégesis normativa, es decir:

El Estado de Derecho corresponde a aquel en donde las autoridades se guían, duran y se someten a un derecho actual, lo que se identifica como un Estado de Derecho Formal. Éste se genera cuando toda acción social y del Estado halla su razón de ser en la norma; es de esta forma que el poder del Estado queda supeditado al orden jurídico actual por cumplir con el proceso para su invención y es efectivo cuando se aplica en la realidad con fundamento en el poder del Estado por medio de las entidades

del gobierno, generando de este modo un clima de respeto total del ser humano y del orden público. (Uniderecho, 2015).

Se observa como la constitución de 1886 restringía el concepto de ciudadanía, y, por tanto, la concepción misma de soberanía, en este sentido, el artículo segundo de la carta política establecía que “La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece” (Constitución Política de Colombia, 1886). Si bien el artículo consagra que la soberanía recae en la nación, es decir, en el pueblo, lo que se entendería que abarca a todos los habitantes, sin distinción de sexo, raza, ocupación, posición económica, en lo concerniente al concepto de ciudadano, la mencionada carta, consagraba que “Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia” (Constitución Política de Colombia, 1886), esto demuestra como desde la literalidad de la Constitución, se excluyó a buena parte de la población nacional de la calidad de ciudadanos, lo que conllevaba a una afectación inmediata también al concepto de soberanía.

Con la promulgación de la Constitución de 1991 se da un cambio trascendental en Colombia, transformándose desde la concepción misma del Estado, al dejar de ser un Estado de Derecho y configurarse como un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como se puede leer en el artículo primero de la nueva carta política:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Constitución Política de Colombia, Art.1).

De lo anterior, se puede determinar un paso significativo hacia un nuevo modelo de Estado, un Estado incluyente, garantista, democrático, participativo, pluralista, donde el centro de la atención es el ser humano y su dignidad, en cuanto que es persona, sin distinción alguna, lo cual, indiscutiblemente, tenía que entrar a modificar el concepto de ciudadanía, y, por tanto, el ejercicio del sufragio. Es así, como el artículo 98 de la Constitución, en su párrafo, solo establece una condición para obtener la plena ciudadanía, es decir, tener derecho a sufragar, siendo esta, la mayoría de edad “Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años” (Constitución Política de Colombia, Art. 98).

Como se observa de la simple lectura de los artículos citados, el cambio es significativo, y configura un verdadero modelo democrática, ya que se eliminan las restricciones para adquirir la calidad de ciudadano que consagraba la constitución de 1886, por una ciudadanía amplia, que garantiza la participación de quien lo desee, cumpliendo los verdaderos principios democráticos de inclusión, igualdad y pluralismo.

Con lo anterior, se legitima de mayor manera la soberanía del Estado, que según la Carta Política reside en el pueblo, lo cual amplía la posibilidad de la participación ciudadana, la incidencia del pueblo en el Estado, y en general, la configuración de una verdadera ciudadanía política. En este sentido, el autor Oscar Quintana manifiesta que:

No hay democracia mientras esta no sea convalidada por la participación activa y efectiva de la ciudadanía en todos y cada uno de los aspectos que conciernen su vida diaria, principalmente cuando ellos afectan sus más elementales derechos de subsistencia y respeto a su dignidad humana. (Quintana, 1998, pág. 197).

En lo que respecta a la legitimación de la ciudadanía política se expresa que,

De esta manera, se observa que el tránsito de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, ha sido indispensable en la consolidación del modelo democrático colombiano, toda vez que permite la posibilidad de una masiva participación ciudadana, y legitimar así las instituciones, los gobiernos, y el accionar de los mismos. Sin embargo, pese a las disposiciones constitucionales que favorecen la ciudadanía activa, la realidad es el constante y alto índice de abstencionismo electoral, cada vez son menos los ciudadanos que van a las urnas y ejercen su derecho al voto, lo que ha debilitado la democracia, y fortalecido discusiones, como la que motiva esta investigación, el voto obligatorio.

2. El voto y la legitimación de la ciudadanía política.

Como ya se ha expresado anteriormente, los bajos índices de participación electoral terminan siendo origen de la deslegitimación de las entidades públicas y de sus gobiernos, sin embargo, surge la inquietud de ¿se legitima la ciudadanía política a pesar de la baja participación electoral? Teniendo que esta se materializa en el derecho al sufragio, y, por tanto, una sociedad en la que sus ciudadanos no participan en los escenarios propios de la democracia va deslegitimando su propia ciudadanía, en este sentido, es importante tener presente que:

El ciudadano, desde los orígenes de los sistemas liberales y democráticos a finales del siglo XVIII y principios del XX ha visto evolucionar sus roles. En un primer momento el ciudadano lo era desde un punto de vista formal, sujeto de un conjunto de derechos formales y de una igualdad formal ante la ley (constituciones de los EE. UU. de 1787, Francia de 1791 y España de 1812), apareciendo el Estado de Derecho. Posteriormente, el ciudadano conquista sus derechos de participación política con la extensión del sufragio universal masculino (Francia en 1848 y en la Constitución

española de 1869) y femenino (Reino Unido en 1928 y en la Constitución Española de 1931), haciéndose cierto el Estado Democrático. Además, tras la Segunda Guerra Mundial se generalizan los derechos sociales y la implantación del modelo del Estado de Bienestar, consolidándose el Estado Social (Constitución italiana de 1947 y Ley Fundamental de Bonn de 1949). (Escuela de Administración Regional, 2009).

En este mismo sentido, si bien el hecho del ejercicio del sufragio no es la única característica de la ciudadanía al interior de un modelo o Estado democrático, si representa una de las características más relevantes, y uno de los avances en la constitución de derechos más significativos, lo que brinda sustento a la idea de un Estado garantista de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, que promueve la incidencia política de sus ciudadanos en los asuntos de la administración, queriendo decir esto que,

Se entiende la ciudadanía política (es decir, la expansión de los derechos a partir de la participación ciudadana) como un camino fundamental para la mayor satisfacción de los derechos sociales y civiles, y por lo tanto para la consolidación de la democracia plena. (PNUD Colombia, 2014).

Es importante resaltar, conforme a la anterior cita del PNUD Colombia, que la participación ciudadana, la cual se materializa de manera más amplia y significativa en el ejercicio del voto, tiene relación directa con la calidad democrática de un Estado, es decir, en la medida que sus ciudadanos ejercen sus derechos políticos, participan de las contiendas electorales, se fortalece la democracia y se legitima el Estado, sus instituciones y gobiernos, pero a su vez, se legitima la existencia misma de la ciudadanía política, se evidencia la razón de ser los derechos políticos, de la participación ciudadana como mecanismo de incidencia en la toma de decisiones en el Estado.

3. El fenómeno del abstencionismo.

Entendiendo en contexto la importancia del voto respecto de la incidencia y repercusión directa en la toma de decisiones y elección popular de gobernantes y cargos públicos, es de vital importancia analizar cómo el abstencionismo electoral afecta la legitimidad de la ciudadanía política que recae en cabeza de cada uno de los ciudadanos del Estado colombiano.

Si bien la Constitución Política de 1991 consagró el voto en una doble dimensión, de derecho y deber, este se dejó a título de voluntario, y en las contiendas electorales, no se hacen esperar los bajos indicadores de participación ciudadana, dándose contiendas electorales, y tomándose decisiones, que se deben aceptar, en cuanto que cumplieron con las tramites y requerimientos para su desarrollo, y por tanto, se deben acatar pero los resultados, pero a su vez, completamente deslegitimados desde la soberanía popular, toda vez que no representan la voluntad de todos los ciudadanos, sino de una mínima cuota de ellos.

En este sentido, se entiende por abstencionismo como aquel comportamiento generalizado a nivel social, en el que buena parte de determinada comunidad opta por “la no participación en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello (...) es un indicador de la participación: muestra el porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho de voto”. (Barrero, 2013).

Uno de los interrogantes que toma fuerza a este punto, es ¿por qué los ciudadanos se abstienen de votar?, a lo cual, como respuesta, se pueden obtener dos grandes escenarios, uno individual, y uno colectivo, cada uno lleno de razones por las que la ciudadanía prefiere dejar de ejercer su derecho y deber de sufragar; entre los factores individuales, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, se puede destacar “la edad, la educación, el nivel

económico individual, Estado civil, pertenencia a gremios o sindicatos, el género, el empleo formal, el lugar de residencia y la pertenencia a grupos minoritarios. (Barrero, 2013).

Pese a lo anterior, el autor plantea una segunda clasificación, que se construye a partir de las múltiples situaciones que aquejan a una colectividad, y que motivan a las personas a dejar de ejercer el sufragio, siendo estas, la dimensión socioeconómica, dimensión política, dimensión institucional.

En la dimensión socioeconómica convergen múltiples factores, que, desde la perspectiva social, pueden condicionar la participación de la ciudadanía, “temas como el tamaño de la población, el grado de homogeneidad de esa población, las conductas aprendidas y la violencia” (Barrero, 2013). Así mismo, puede observarse que, en la dimensión política, diversos factores pueden alterar la participación, bien sea des ideologías, las formas en que los partidos buscan conseguir los votos, desacuerdo con los modelos propuestos, “las campañas electorales, la competitividad de las elecciones, y la fragmentación partidaria” (Barrero, 2013). Y, por último, en lo concerniente a la dimensión institucional, puede sostenerse que, desde la misma institucionalidad electoral, desde el mismo Estado, se puede prevenir o desmotivar al elector, lo que decanta en su negativa a participar de los comicios, aspectos como el mismo “sistema electoral, la concurrencia de elecciones, los requisitos de inscripción, y el voto obligatorio”. (Barrero, 2013).

Es así, como el abstencionismo se ha apoderado de las elecciones en Colombia, y es una constante manifestación de la ciudadanía de su negativa a la participación democrática y a un verdadero ejercicio de su ciudadanía política. A continuación, se expone con dos ejemplos, sólo con el fin de mostrar desde casos puntuales, los alcances del abstencionismo en el país.

3.1. Ejemplo y análisis de dos casos.

Para hacer un primer abordaje superficial, pero que permita comprender la magnitud del problema del abstencionismo en Colombia, basta con observar los resultados electorales de las Elecciones presidenciales de 2014.

Figura 2. Resultados electorales Elecciones Presidenciales 2014. Fuente de datos: Registraduría Nacional del Estado Civil. Gráfico elaboración propia.

El ejemplo dado con lo que respecta a los resultados de participación electoral en las elecciones presidenciales de 2014, muestran un escenario de ausencia de participación ciudadana, de mínimo ejercicio del derecho al voto, lo cual afecta de manera grave la legitimidad de la ciudadanía política, ya que como se expresaba en líneas anteriores, dicha ciudadanía se fundamenta en el máximo ejercicio de los mecanismos de participación y en la incidencia activa de los ciudadanos en la administración y asuntos públicos y gubernamentales, por tanto, este escenario de abstencionismo que para la primera vuelta presidencial alcanzo el 59,93% y en la segunda vuelta el 52,11%, denotan que en Colombia, elecciones de la más alta trascendencia como lo son la del Jefe del Estado y el Gobierno, se toman con la ausencia de participación de más de la mitad del potencial electoral, lo cual a la luz del Estado Democrático de Derecho y de la democracia participativa, muestra un

escenario de deslegitimación del Estado, y para el caso concreto, de las decisiones tomadas mediante elección popular.

La situación más alarmante en cuanto a abstencionismo electoral se registró en la pasada jornada electoral para el plebiscito del pasado 2 de octubre del año 2016, donde la participación sólo alcanzó un porcentaje del 34,43%, es decir, solo ejercieron su derecho al voto 13.066.047 de 34.899.945 personas habilitadas para votar. A este punto, haciendo memoria de lo antes citado, el autor Fredy Barrero manifestaba que dentro de las causas del abstencionismo a nivel colectivo, se encontraban aspectos políticos e institucionales, y lo presentado en el expuesto plebiscito, es una muestra inequívoca de ello, toda vez que en esta contienda electoral, se presentaron, por un lado, múltiples saturaciones de la misma institucionalidad promoviendo una de las opciones que tendrían los ciudadanos en el mecanismo de participación, y a su vez, una presión política y social hacia el elector, desde los diferentes actores del escenario político colombiano, acompañado de una fragmentación social y polarización, promovida por los mismos partidos y líderes políticos.

Estos escenarios descritos, dejan en evidencia la necesidad de medidas por parte del Estado, tendientes a aumentar los niveles de participación electoral, y garantizar de esta manera, resultados legitimados y que representen verdaderamente el querer y los intereses de la ciudadanía, a este punto, la implementación del voto obligatorio es una opción que ofrece la posibilidad de consolidar una participación más activa, fomentar el ejercicio de la ciudadanía política y legitimar los resultados electorales.

4. Antecedentes de reforma constitucional para el establecimiento del voto obligatorio en Colombia.

Pese a la reciente adopción constitucional en la Carta del 91 del voto voluntario, sin formas de coaccionar al elector para su ejercicio, los mismos resultados electorales, específicamente, los índices de participación en las elecciones han puesto en el debate público la necesidad de tomar medidas encaminadas a garantizar un pleno, o por lo menos mayoritario, ejercicio del derecho al voto y la ciudadanía política. Sin embargo, se observa que esta discusión se ha dado en los últimos años a nivel legislativo, con múltiples proyectos que buscaban introducir el voto obligatorio al texto constitucional, tal y como se puede consultar en la gaceta del Congreso, o en la organización Congreso Visible.

A continuación, se exponen los múltiples intentos de reforma constitucional con los que se ha pretendido introducir el voto obligatorio al sistema electoral colombiano.

4.1. Acto legislativo No. 05 de 2006.

En el año 2006 se tramitó en el congreso el proyecto de acto legislativo número 05, el cual buscaba reformar algunos artículos de la constitución, y así, establecer el voto obligatorio en Colombia. En este trámite legislativo se buscaba adoptar una concepción del voto-deber, en su modalidad de obligatorio, procurando una mayor legitimidad de los procesos eleccionarios y de quienes resulten favorecidos por las mayorías, así como un mayor compromiso, una mayor responsabilidad de los elegidos para con la sociedad, dejando de lado los efectos negativos de deslegitimación, fruto del abstencionismo, y la ausencia de responsabilidad del elegido. Con este proyecto, se buscaba adicionar al inciso 1 del artículo 258 de la Constitución Política, la expresión “Asimismo, establecerá las consecuencias derivadas del incumplimiento de este deber” (Constitución Política de Colombia, Art.258), con lo que se imponía la obligatoriedad del ejercicio del voto, en su sentido como deber.

En el mismo año, se presentó el proyecto de acto legislativo número 101 de 2006, con el exclusivo fin de implementar el voto obligatorio, estableciendo consecuencias para el incumplimiento del deber de votar. Dentro de la exposición de motivos de mencionado proyecto de reforma, se enfatiza en el abstencionismo electoral, donde “las estadísticas electorales en Colombia muestran que Colombia sólo ha superado el 50% de participación electoral en 20 elecciones de 60 celebradas entre 1914 y 1991, lo que lo convierte en el país con más baja participación en el continente” (Cámara de Representantes, 2006).

Argumenta el proyecto de reforma, que los altos índices de abstención debilitan la democracia, y abre posibilidades para el fomento de la corrupción, y otros males que pueden afectar el orden democrático, lo expone desde un fundamento filosófico al expresar que

Desde el surgimiento de la democracia se observan apreciaciones en este sentido. Aristóteles plantea que la abstención contribuye a la formación de regímenes tiránicos, y se refiere a ella como la cómoda indiferencia de los pueblos⁰. Rousseau plantea en El Contrato Social, que La ley es la expresión de la Voluntad General. Todos los ciudadanos han de participar personalmente, o por sus representantes, en su formación (Cámara de Representantes, 2006).

Así las cosas, la abstención es un fenómeno que mina la legitimidad del proceso democrático, abre escenarios que decantan en el fortalecimiento de la corrupción y debilita la naturaleza misma del Estado social y democrático de derecho, es por esto, que el mencionado acto legislativo buscaba:

establecer expresamente en el texto constitucional, sin lugar a duda, que todo ciudadano tiene el deber o la obligación inexcusable de ejercer el voto como mecanismo de participación ciudadana, derecho político fundamental. No se obliga

al ejercicio de los otros mecanismos (plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria del mandato). (Cámara de Representantes, 2006).

Por lo anterior, se requiere que quede fijada en la norma constitucional la fuente de las consecuencias que acarrea para el ciudadano el incumplimiento de la obligación de votar, tal como se expresa también para los beneficios y estímulos como compensación al buen ejercicio de su derecho al voto. (Cámara de Representantes, 2006).

4.2. Acto legislativo No. 25 de 2007.

El proyecto de acto legislativo 25 de 2007, presentado por el Senado de la República, buscaba realizar modificaciones constitucionales encaminadas a fortalecer la democracia en Colombia, dentro de las cuales se encontraba modificar el artículo 258 de la carta política, el cual quedaría así:

El voto es un derecho y un deber ciudadano, de obligatorio cumplimiento. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos. En cada votación la organización electoral utilizará instrumentos en los cuales aparezcan identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley determinará mecanismos que otorguen garantías para el libre ejercicio de este deber y las sanciones a que haya lugar por su incumplimiento. (Senado de la República, 2007).

Según este proyecto de acto legislativo, la implementación del voto obligatorio en Colombia debería estar acompañado de un fuerte sistema de sanciones eficaces, entre las cuales se contemplaban las multas, la prohibición de ocupar cargos públicos o imposibilidad de contratar con el Estado, de tramitar documentos como registros o el mismo pasaporte. En

este mismo sentido, el proyecto de acto legislativo 09 de 2007 buscó reformar el artículo 258 constitucional, con el fin de establecer el voto obligatorio en Colombia, donde se puede observar una preocupación constante, similar a la de los anteriores proyectos, siendo enfático en la debilidad que representa para la democracia, el alto nivel de abstención, el cual siempre tiende a superar el 50%, donde entre el año 1914 y 1991, tras 60 elecciones celebrados, sólo se ha superado el 50% en participación, en 20 comicios electorales. (Senado de la República, 2007).

4.3. Acto legislativo No. 14 de 2010.

La polémica frente a la necesidad de implementar el voto obligatorio en Colombia se reabrió a nivel legislativo con el proyecto de reforma constitucional No. 14 de 2010, el cual se presenta después de las elecciones presidenciales de ese año, y donde se expone de manera comparativa el historial de abstención en elecciones presidenciales, el cual se muestra en la siguiente gráfica:

Figura No. 3. Historial de abstención en elecciones presidenciales. Fuente de datos: Proyecto de Acto Legislativo No. 14 de 2010. Gráfico elaboración propia.

Haciendo un análisis de la gráfica anterior, y de la historia electoral colombiana, se llega a la conclusión de que se pueden identificar una tipología segmentada en tres grandes grupos representativos, de las tendencias con relación al abstencionismo

1. País político= 30% de población electoral conformado por las personas con cultura política y conciencia cívica y por la burocracia estatal.

2. Abstencionismo coyuntural= 20% de población electoral conformada por aquellos que eventualmente salen a votar alentados y motivados en mayor o menor grado por las tesis y programas o por candidatos carismáticos que movilizan esta franja.

3. Abstencionismo estructural= 50% de población electoral conformado por la gran masa de desposeídos, marginados, desempleados o relegados a actividades informales abandonados por el Estado.

En este sentido, se expresa en el proyecto de acto legislativo que el alto índice de abstención en Colombia, constante a todas las elecciones tanto nacionales como regionales, representa una amenaza a los principio democráticos, rectores del Estado social de derecho, desestabilizando las instituciones y por tanto, la figura misma del Estado “En Colombia son elegidos en realidad por minorías, no por las mayorías establecidas según el principio democrático, lo cual actúa en detrimento de la legitimidad y la gobernabilidad de los gobernantes e instituciones que son resultado del proceso electoral” (Senado de la República, 2010).

De la lectura de los fundamentos del proyecto de reforma constitucional, se observa que la abstención en Colombia conlleva otro tipo de efectos o consecuencias más propios y particulares, es decir, los bajos índices de participación permiten el funcionamiento eficaz y

propagación de maquinarias clientelistas y de la corrupción que debilitan la democracia, toda vez que existe una alta relación entre los niveles de abstención y el monto de los recursos públicos y privados que movilizan las maquinarias con fines electorales. La maquinaria dedica gran parte de su tiempo a promover estas situaciones que amplían la problemática, como forma de sostener sus condiciones de existencia, así, la mayor complejidad de la sociedad, la ausencia de madurez política de la misma y de ciudadanía con sentido democrático, hace de la baja participación política en Colombia el escenario perfecto para el funcionamiento eficiente de la maquinaria clientelista no responsable. (Senado de la República, 2010).

4.4. Acto legislativo No. 01 de 2014.

La polémica del voto obligatorio vuelve al escenario legislativo en el año 2014, con el proyecto de acto legislativo No. 01, donde se intentó nuevamente modificar el artículo 258 constitucional, para incluir el componente de obligatoriedad del voto. Así mismo, en lo corrido del mencionado año, en la Cámara de Representantes se tramitó el proyecto de acto legislativo No. 38, enfocada igualmente en establecer la obligatoriedad del voto. Sin embargo, la última apuesta por el voto obligatorio, se realizó en este mismo, en la Cámara de Representantes, cuando se incluyó dentro del proyecto de acto legislativo No. 86 de Reforma al Sistema Electoral Colombiano, en él, se hace defensa de esta reforma, argumentado que “el voto obligatorio aumenta de manera sustancial la participación electoral y de esta manera los gobernantes electos tendrán una legitimidad más contundente, dada la implicación de una mayor participación ciudadana” (Cámara de Representantes, 2014)

En este sentido, es necesario para llegar a una democracia adecuada y sólida, que todos los ciudadanos participen en las elecciones, es el mensaje de la reforma, y que no existe

un medio más eficiente y directo para lograrlo, que intentar que el máximo posible de ciudadanos se acerquen a las urnas, a fin de expresar sus preferencias políticas e incidir en el destino de la nación, lo que sólo se podría obtener mediante la implementación del voto obligatorio, como una acción coercitiva al ejercicio de un derecho, en su doble condición de deber. Así las cosas,

En un Estado social de derecho como el que impera en Colombia, el ciudadano no solo es sujeto de derechos, también es sujeto de deberes. Así las cosas, se eleva como deber fundamental del ciudadano aquel que este tiene no solo para con su familia y su comunidad sino también para con su patria. Este deber se perfecciona precisamente cuando se ejerce como derecho, cuando se vota. El voto es entonces la máxima expresión de los deberes ciudadanos. (Cámara de Representantes, 2014).

Lo anterior, permite evidenciar los múltiples intentos de reforma constitucional, con los que el legislativo colombiano ha pretendido establecer el voto obligatorio en Colombia, siendo importante para esta investigación conocerlos, toda vez que sus fundamentos y exposiciones de motivos, se encuentran cargadas de argumentos que favorecen el voto obligatorio como una forma de solidificar la democracia y activar la ciudadanía política.

5. Viabilidad y procedencia de la implementación del voto obligatorio en Colombia.

la prueba de fuego a la implementación del voto obligatorio en Colombia, ha sido, si esto afecta el espíritu de la constitución, si iría en contra de los derechos fundamentales, las mismas garantías constitucionales, e incluso, si esto sería una sustitución de la constitución, por lo que se debe abordar, desde el nivel teórico dicha temática, para demostrar que el voto

obligatorio es acorde al modelo de Estado democrático, y que resulta viable dentro de la estructura constitucional colombiana.

En materia de derechos fundamentales, se podría aducir en contra del voto obligatorio, que atento contra los derechos de libertad, y el libre desarrollo de la personalidad, sin embargo, a continuación, se presentan argumentos tendientes a demostrar que no se causaría dicha vulneración.

5.1. Del voto obligatorio, el derecho fundamental a la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.

La Constitución Política de Colombia, desde sus principios fundamentales y los fines esenciales del Estado, consagrados en el artículo segundo, establece la libertad como pilar de la democracia, así mismo, en su artículo 16, expresa que “todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” (Constitución Política de Colombia, 1991). Sin embargo, la literalidad misma del artículo citado deja abierta la posibilidad de establecer ciertas restricciones o limitaciones a dicho derecho, es decir, se es plenamente libre para desarrollar la personalidad, siempre que se enmarque en las normas constitucionales y el ordenamiento jurídico. A este punto, se debe citar el pensamiento de Rousseau y su idea de libertad, quien manifestaba que “el hombre sería libre cuando obedece las leyes y no a otros hombres” (Rousseau, 1980).

Frente al libre desarrollo de la personalidad, la misma Corte Constitucional ha manifestado en su jurisprudencia que existe la posibilidad de imponer límites a este derecho fundamental, para la corporación, este derecho tiene dos dimensiones, una interna y esencial, que no afecta a la colectividad, y una segunda respecto del individuo hacia terceros, hacia la

sociedad, y es aquí donde si proceden limitaciones al mencionado derecho, en este sentido ha expresado el Alto Tribunal que:

concurrentes aquellas actuaciones en donde el comportamiento del sujeto puede incorporar afectaciones a derechos fundamentales de otras personas, caso en el cual sí son admisibles limitaciones, siempre y cuando superen satisfactoriamente criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En ese sentido, la restricción correspondiente solo devendrá legítima cuando cumpla con finalidades constitucionalmente obligatorias, como son precisamente la protección de los derechos fundamentales de otras personas. (Sentencia T-565, 2013).

Si se analiza en contexto la Carta Política, en el artículo 258 al regular el voto, el constituyente dio una doble dimensión al mecanismo, lo consagró como un derecho, y a su vez, como un deber, por tanto, implementar el voto obligatorio no sería una modificación constitucional trascendental, sino que por el contrario, se estaría desarrollando lo ya dispuesto en la carta política, toda vez, que cuando se consagra un deber en cuerpo normativo, este lleva implícito unas consecuencias frente a su incumplimiento. Por tanto, si la misma Corte Constitucional en su interpretación manifiesta que es posible establecer límites al libre desarrollo de la personalidad, cuando el sustento de ello sea un bien colectivo y constitucional, resulta plenamente procedente la implementación del voto obligatorio, toda vez que su único fin, es fortalecer la democracia y la participación ciudadana, lo cuales también son bienes constitucionales. En este sentido, se podría recordar a John Rawls, cuando manifestaba que:

La característica especial de un régimen constitucional es la de que el poder político es, en últimas, el poder público, es decir, el poder de ciudadanos libres e iguales en

tanto cuerpo colectivo, ello plantea la cuestión de la legitimidad de la autoridad, a la cual está íntimamente conectada la idea de razón pública. (Rawls, 1993).

Adicionalmente, resulta inadmisibile, con base en lo ya expuesto, aseverar una sustitución de la constitución, por la implementación del voto obligatorio, toda vez que para que esto suceda, se debe cambiar en el fondo el espíritu de la Carta Política, ir en contra de la voluntad del constituyente, y a través de una reforma, darle un giro absoluto al sentido de la Constitución, en palabra de la Corte Constitucional, la sustitución de la constitución:

Es un reemplazo de la Constitución en términos materiales e implica franca oposición entre lo nuevo y lo anterior, en la medida en que, so pretexto de la reforma, la Constitución es transformada en otra completamente distinta, que, por ejemplo, sirva de base a una forma de organización política opuesta, como cuando se cambia la república por la monarquía, la democracia por la dictadura o el Estado de Derecho por el totalitarismo. (Sentencia C-574, 2011).

La definición dada por el Alto Tribunal, respecto a la sustitución de la constitución, es más que suficiente para entender que la adopción del voto obligatorio no iría en contra de la Constitución, ni la estaría cambiando materialmente, por el contrario, solo se estaría desarrollando un aparte de la misma, en lo relacionado al voto como deber, con un fin legítimo, que es la solidificación del modelo democrático, la maximización de la participación ciudadana, y la consolidación de una verdadera ciudadanía política en Colombia.

CONCLUSIONES

1. El voto obligatorio dentro del modelo de Estado democrático.

Dentro del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho adoptado por Colombia, se reconocen diferentes mecanismos y formas de participación ciudadana, cuyo objetivo, es garantizar el desarrollo del orden democrático, la incidencia tanto directa como representativa, sin embargo, en términos de eficacia de dichas disposiciones constitucionales, como se expresó en párrafos anteriores, el ejercicio de la ciudadanía política es mínimo, es decir, la participación electoral presenta índices de abstencionismo que atentan contra la legitimidad del sistema, y de las decisiones tomadas mediante elección popular.

En este sentido, implementar el voto obligatorio en Colombia no sería contrario a la Constitución Política de Colombia, ni al modelo de Estado en ella adoptado, por el contrario, reglamentado de manera pertinente, representa una oportunidad para potenciar el espíritu democrático por el que desde la Constitución se propende, el fomento de la participación ciudadana y la maximización de la conciencia por la participación política y la injerencia en los asuntos del Estado.

Desde la concepción del Estado a nivel constitucional, y la naturaleza misma de la democracia, se establece que la soberanía reside en la totalidad del pueblo⁸, así lo consagra el artículo tercero de la Carta Política, y, por tanto, el poder de los gobernantes emana de la reunión de todo los ciudadanos y del consenso entre los mismos, o en su defecto, de la decisión de las mayorías, siendo ahí el momento en que toma especial relevancia el voto en la vida democrática de un Estado, como instrumento que permite la participación de sus

⁸ Véase el Artículo 3 de la Constitución Política de Colombia. (1991).

ciudadanos, la manifestación de su voluntad, es decir, que se convierte en expresión de la soberanía popular misma. Con lo anterior, se hace necesario establecer el voto obligatorio en Colombia, dado que, a lo largo de la historia electoral del país, se observa que han sido las minorías electorales quienes han elegido a los gobernantes, y no las mayorías como lo promueve los principios democráticos, lo cual quebranta la legitimidad y gobernabilidad, tanto de los mandatarios, como de las mismas instituciones.

En este sentido, implementar el voto obligatorio no resulta contradictorio al Estado democrático, tal y como se observó en páginas anteriores, desde la misma doctrina resulta plenamente acertado adoptar esta modalidad, si bien, por ejemplo, desde lo planteado por Thomas Hobbes:

Una multitud se hace una persona cuando son representados por un hombre, siempre que se haya hecho con el consentimiento de cada uno en particular de los de aquella multitud, pues la unidad del mandatario, no la unidad de los representados, lo que hace de la persona una y es el mandatario el portador de la persona, y de una sola persona. La unidad en multitud no puede entenderse de otra forma. (Hobbes, 1651).

La anterior cita del Leviatán, pese a que fue escrito en el año 1651, resulta más que propicia y aplicable a la realidad, en la medida que, si los gobernantes representan al pueblo, y administran sus derechos y libertades, tomando decisiones en su nombre o representación, esto sólo encuentra legitimidad en que la elección se haya realizado con todos los ciudadanos, que verdaderamente el resultado refleje el deseo o la voluntad del soberano, es decir, del pueblo. Así mismo lo contemplaba Jean Jacques Rousseau, para quien queda voto representaba parte de la voluntad del soberano, del pueblo, es decir, la legitimidad se alcanzaba sólo con la sumatoria de cada una de las expresiones individuales, para conformar

un consenso, o por lo menos, una decisión realmente mayoritaria, ahí se configuraba la eficacia del contrato social, toda vez que:

produce inmediatamente, en lugar de la persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos (voces) (*voix*) tiene la asamblea, el cual recibe en este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. (Rousseau, 1991).

Analizando en contexto lo planteado por la teoría, desde la realidad constitucional misma del país, se observa que como tal al modelo de Estado democrático, no se le haría modificación trascendental alguna con establecer el voto obligatorio, es más, la misma Constitución Política de Colombia concibe el voto como un derecho, pero a su vez, como un deber, por tanto, se puede reglamentar a través del trámite legislativo correspondiente, sin que signifique esto una sustitución de la constitución, ni se falte al espíritu de la misma.

En este sentido, la presente investigación concluye la plena viabilidad constitucional de la implementación del voto obligatorio, toda vez que este resulta armónico con las disposiciones constitucionales, con la consagración del voto como deber, lo cual hace que dentro del sistema electoral colombiano, el voto sea un derecho de elegir, pero también una responsabilidad y una obligación para con el Estado, como una forma de perpetuar su legitimidad, en este sentido, su implementación no sería una cambiante modificación constitucional, sino por el contrario, el desarrollo legislativo de una obligación reconocida a nivel constitucional que tiene todo ciudadano, la participar a través del deber del voto.

Es importante resaltar, que la obligatoriedad del voto podría implementarse de manera exclusiva para los comicios de elección representativa, toda vez que la Corte Constitucional colombiana de manera expresa, en su jurisprudencia constitucional ha establecido que en mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito o referéndum, en los que también

la ciudadanía es convocada a las urnas, la abstención de participar en la elección es una forma más de expresión, de rechazo al tema consultado, caso contrario a las comicios para cargos de elección popular. En este sentido,

La Corporación ha establecido una clara diferencia entre el sufragio para las elecciones, y el sufragio para los demás mecanismos de participación democrática. La Corte ha puesto de presente que mientras las elecciones son concebidas como una forma de escogencia de personas o autoridades característica de la democracia representativa en la que la participación mediante el voto incide en el adecuado funcionamiento de la misma y en el grado de legitimidad de los elegidos, los otros mecanismos de participación política como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, son inherentes a un modelo de democracia participativa donde no necesariamente el ejercicio del derecho se materializa por medio del voto, y donde incluso la Constitución confiere eficacia jurídica a la abstención⁹. (Sentencia C-514, 2004).

2. Modificaciones constitucionales.

En la actualidad, la Constitución Política de Colombia, concibe en su artículo 258 consagra el voto de la siguiente manera:

⁹ En este mismo sentido, en la sentencia C-041 del mismo año, la Corte manifestó que “Para el caso específico de los referendos constitucionales, la abstención no es vista como un fenómeno negativo, como si sucede con la ausencia de participación de los ciudadanos en las elecciones en una democracia representativa. Todo lo contrario. La abstención es considerada como una decisión política válida, una expresión de rechazo, individual o colectiva de unos ciudadanos libres, acerca de unas propuestas de reforma constitucional que son sometidas a la aprobación del pueblo, que está llamada a producir determinados efectos jurídicos y que goza de una debida protección constitucional. Otro tanto sucede con los demás mecanismos de participación ciudadana”. (Sentencia -041, 2004)

El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. (Constitución Política de Colombia, Art.258).

Se observa, que, si bien establece el carácter de deber de ejercicio del voto, no adopta medidas que o hagan obligatorio, lo cual deja abierta la posibilidad, de mediante el trámite legislativo, adicionarle esta condición al voto, en su calidad de mecanismo de participación ciudadana, en la medida que sólo se estaría desarrollando, mas no sustituyendo la Constitución.

Conforme a lo anterior, y tras el desarrollo de toda la investigación, y de manera propositiva, se plantea que el siguiente debería ser la redacción del mencionado artículo, para de esta manera implementar el voto obligatorio en Colombia, armonizándolo con el espíritu constitucional y democrático:

*El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción, en forma secreta y **obligatoria** por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales*

*numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos, igualmente, **implementará las sanciones pertinentes para los ciudadanos que incumplan este deber.***

Así mismo, se sugiere adicionar un párrafo en el cual se incluyan en el artículo, las excepciones de la obligatoriedad del voto, para los cuales se plantea la siguiente redacción:

Parágrafo 1. Excepciones. Quedarán exentos de la obligatoriedad del voto:

- a) Los mayores de setenta (70) años;*
- b) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.*
- c) los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas.*

Tales ciudadanos se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia.

Adicionalmente, con el fin de que se encuentre debidamente fundamentado a nivel constitucional el voto obligatorio, y el proceder posterior al incumplimiento de dicho deber ciudadano, se debe incluir un segundo párrafo en el cual se expresen las sanciones a imponer, frente a lo que se propone que sean las siguientes:

Parágrafo 3°. Sanciones.

Aquellos ciudadanos que no cumplan el deber de votar serán sancionados con la prestación de servicio comunitario regulado por el gobierno nacional, no podrán aspirar a cargos públicos dentro del siguiente periodo constitucional, ni contratar con el Estado dentro del mismo lapso. Adicionalmente, no podrán tramitar documentos estatales o registros por el siguiente año, tramitar pasaporte, ni recibir beneficio alguno otorgado por parte del Estado a través de sus instituciones.

3. Socialización y concientización.

En el objetivo de consolidar una democracia fuerte, legítima, que corresponda a la voluntad real del soberano primario, el pueblo, la cual se manifieste a través de su participación activa en la toma de decisiones a través del ejercicio del voto en las contiendas electorales, no basta sólo con la implementación del voto obligatorio, sino que se requiere de una mejora a los incentivos relacionados con el ejercicio de este derecho, sin embargo, algo más importante que lo anterior, es generar procesos educativos en materia de participación ciudadana.

Es por esto, que desde la presente investigación, se concluye que se deben aprovechar espacios como la formación escolar para generar procesos de comunicación y participación que formen a los estudiantes inculcándoles los principios y valores de la democracia, de la participación política y el ejercicio de la ciudadanía política, así, es necesario impartir una educación cívica que enaltezca la institucionalidad política, una pedagogía que combine la ética y la política, impulsando la participación de movimientos sociales, rompiendo con el elitismo político.

Adicionalmente, se debe instaurar una catedra electoral, la cual deberá ser el escenario idóneo que permitirá que se creen las condiciones propicias para el funcionamiento de la democracia participativa, para así inculcar la ciudadanía política activa desde edades tempranas, despertando desde los inicios el interés hacia el manejo de lo público, formando ciudadanos comprometidos con los valores de la democracia, la igualdad social, solidaridad y ampliando los niveles de participación, fomentando procesos en los que a través de la pedagogía constitucional, se puedan eliminar situaciones de exclusión, y especialmente, comunidades educadas contra la corrupción y las maquinarias políticas que están siempre al acecho de la actividad electoral.

En conclusión, para maximizar la efectividad del voto obligatorio, se requiere de la institucionalización de la educación cívica electoral, donde se imparta conocimiento, se genere conciencia, y la vez el hábito de la participación, para que los ciudadanos participen de manera responsable y activa en la toma de decisiones del país, lo que decantara en gobiernos legítimos, instituciones sólidas y respetadas, y devolverá la confianza y credibilidad del pueblo hacia el Estado y su institucionalidad.

De esta manera, concluye la presente investigación, donde se mostraron los elementos teóricos y de referente que sustentan la implementación del voto obligatorio como la mejor herramienta para el fortalecimiento de la democracia y la maximización de la participación política en Colombia, aumentando la legitimidad del Estado, de sus instituciones, gobiernos, y por tanto, de las decisiones, acciones, políticas, leyes y demás elementos que conforman la administración del Estado social y democrático de Derecho.

REFERENCIAS

- Acto Legislativo 1 (1986). Obtenido de
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9440>
- Aragón, M. (2007). *Derecho de sufragio: principio y función*. (I. I. Assistance, Editor) Obtenido de
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina-chapter-9.pdf>
- Aristóteles. (1999). *La Política*. Bogotá D.C.: Panamericana.
- Banco de la República. (2015). *Historia electoral en Colombia*. Recuperado el 20 de 07 de 2017, de Banrepcultural:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/historia_electoral_en_colombia
- Barrero, F. (2013). *Registraduría Nacional*. Obtenido de Abstencionismo electoral en Colombia: una aproximación a sus causas: http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf
- Beleño, Y. (2017). El voto obligatorio en Colombia. *Anfora*, 139-164.
- Bello, D. (17 de 05 de 2010). *El quinto poder*. Obtenido de
<https://www.elquintopoder.cl/politica/voto-obligatorio-mas-que-un-derecho-y-mas-que-un-deber/>
- Bodin, J. (1566). *Los seis libros de la república*. Francia.
- Borja, R. (s.f.). *Enciclopedia de la política*. Recuperado el 18 de 07 de 2017, de
<http://www.encyclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=d&idind=391&termino=>

- Brussino, S. (2005). Participación Política Convencional, No Convencional y No Participación. *CONICET, CONICET*. Obtenido de <http://blogs.psych.unc.edu.ar/psicologiapolitica/2013/08/07/participacion-politica-analisis-explicativo-2/>
- Cámara de Representantes. (2006). *Proyecto de Acto Legislativo 101 de 2006*. Bogotá D.C.: Congreso Visible. Obtenido de http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=03&p_numero=101&p_consec=13619
- Cámara de Representantes. (2014). *Proyecto de Acto Legislativo No. 86*.
- Código de la Democracia. (Art. 10).
- Código de la Democracia. (Art.11).
- Código Electoral Nacional . (Art. 18).
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Art. 2).
- Constitución Política de Colombia (1886). Obtenido de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7153>
- Constitución Política de Colombia. (1991).
- Constitución Política de Colombia, Art. 1 (1991 Art.1).
- Constitución Política de Colombia, Art.258. (s.f.).
- Constitución Política de Ecuador. (Art. 1).
- Constitución Política del Ecuador. Art. 62. (s.f.).
- Constitución Política del Estado de Bolivia . (Art. 11).
- Constitución Política del Perú. (Art. 31).
- Constitución Política del Uruguay. (Art. 77).
- Contreras, C. Correa, F Y García, L. (2005). Participación política no convencional: culturas de protesta vs. culturas institucionales. *Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*, 1(1), 181-210. Recuperado el 10 de 10 de 2016, de <file:///C:/Users/Jos%C3%A9Dar%C3%ADO/Desktop/RUBEN%20DAR%C3%8DO/72610107.pdf>
- Coronel, C. (2005). *La Participación Ciudadana en el derecho electoral colombiano*. Bogotá, Colombia.: Ediciones Doctrina y Ley. Recuperado el 10 de 10 de 2016

- Cortés, F. (2010). El contrato social liberal: John Locke. *Co-herencia*, 7(13). Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-58872010000200005
- Criado, M. (2012). Sobre el concepto de representación política: lineamientos para el estudio de las transformaciones de la democracia representativa. *Derecho del Estado*. Recuperado el 01 de 08 de 2017, de <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3180/3061#num4>
- Diario La Prensa. (15 de 03 de 2011). Historias del voto argentino. *Actualidad*, pág. Hemeroteca UBA.
- El Telegrafo. (28 de 06 de 2016).
- Escuela de Administración Regional. (2009). *Documentación sobre gerencia pública, del Subgrupo A1, Cuerpo Superior, especialidad de Administración General, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tema 3*. Obtenido de La legitimidad de la Administración Pública: legitimidad institucional y legitimidad por rendimiento. La Administración democrática y la participación de los ciudadanos: <http://pagina.jccm.es/ear/descarga/A1T3.pdf>
- Fernández, J. S. y Rojas, A. J. (2003). Escala de acción política no convencional. *Psicología Política*, 41-55. Recuperado el 10 de 10 de 2016, de <http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N26-3.pdf>
- González, F. (2012). *Thomas Hobbes: historia y ciencia civil*. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomás.
- Heller, H. (1997). *Teoría del Estado*. Ciudad de México : Fondo de Cultura Económica.
- Hobbes, T. (2003). *El Leviatan*. Buenos Aires: Losada.
- Hobbes, T. (2016). *De Cive*. Madrid: Alianza Editorial.
- Ley 13882 (Uruguay) . (Art. 14).
- Ley 13882 (Uruguay). (Art. 13).
- Ley Electoral de Bolivia. (s.f.).
- Ley Electoral de Bolivia. (Art. 3).
- Ley Orgánica de Elecciones . (Art. 9).
- Ley Orgánica de Procesos Electorales . (Art. 126).
- Machperson, C. (2005). *La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke*. Madrid: Trotta.
- Montesquieu. (2007). *Del espíritu de las leyes*. Ciudad de México: Éxodo.

- Pérez, M. (1998). Ciudadanía Política y Ciudadanía Social. Los cambios del fin de siglo. *Studia historica. Historia contemporánea*(16), 35-65. Recuperado el 10 de 10 de 2016, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=106798>
- PNUD. (2014). *Ciudadanía política: Voz y participación ciudadana en América Latina*. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editorial Siglo XXI. Recuperado el 10 de 10 de 2016, de <http://www.juventudconvoz.org/archivos/Estudio-Regional-Ciudadania-Politica-PNUD-2014.pdf>
- PNUD Colombia. (21 de 08 de 2014). *Ciudadanía Política: voz y participación ciudadana en América Latina*. Obtenido de <http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2014/08/21/ciudadan-a-pol-tica-voz-y-participaci-n-ciudadana-en-am-rica-latina.html>
- Quintana, Ó. (1998). *Derecho, legitimidad y democracia deliberativa*. Bogotá D.C.: Temis. Recuperado el 20 de 07 de 2017
- Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Rousseau, J.-J. (1980). *El contrato social*. Madrid: Espasa-calpe s.a.
- Senado de la República. (2007).
- Senado de la República. (2010). *Proyecto de Acto Legislativo No. 14*.
- Sentencia -041 (Corte Constitucional 27 de 01 de 2004). Obtenido de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-041-04.htm>
- Sentencia 786 (Corte Suprema de Justicia 1979). Recuperado el 08 de 10 de 2016, de http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30001844#ver_30001850
- Sentencia C-514 (Corte Constitucional 25 de 05 de 2004). Obtenido de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-514-04.htm>
- Sentencia C-574, C-574 (Corte Constitucional 22 de 07 de 2011). Obtenido de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-574-11.htm>
- Sentencia T-565, T-565 (Corte Constitucional 23 de 08 de 2013). Obtenido de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-565-13.htm>
- Sierra, L. (s.f.). El voto como derecho: una cuestión de principios. En S. Lucas, *Modernización del Régimen Electoral Chileno*. Obtenido de <https://www.cepchile.cl/el-voto-como-derecho-una-cuestion-de-principios/cep/2016-03-04/094716.html>
- Subgerencia Cultural del Banco de la República. (s.f.). *Participación política*. Recuperado el 10 de 10 de 2016, de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/participacion_politica

Tomás, C. (2005). Participación electoral obligatoria: una defensa. En *Modernización del Régimen Electoral Chileno*. Chile: Centro de Estudios Públicos.

Uniderecho. (2015). *Uniderecho*. Recuperado el 21 de 07 de 2017, de <http://www.uniderecho.com/que-diferencia-el-estado-de-derecho-del-estado-social-de-derecho-.html>

Vasco, B. (03 de 11 de 1989). Gobierno firmó pacto político con M-19. *Después de ocho meses de dialogo Gobierno firmó pacto político con M-19*. Recuperado el 9 de 10 de 2016, de https://books.google.com.co/books?id=4ONS_30BsuUC&pg=PA175&lpg=PA175&dq=voto+obligatorio+julio+cesar+turbay+ayala&source=bl&ots=wAZownaLbZ&sig=cGKWhWS3OPfUMC-w29n90OeP7S4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjapsGA3snPAhXHax4KHYoJDokQ6AEIMzAE#v=onepage&q=voto%20obligato